

Concepción, doce de enero de dos mil veintidós.

VISTO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO. Que en las sesiones de los días 4, 5 y 6 de enero de 2022, ante la sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, integrada por los jueces titulares Karina Gema Mihovilovic Gutiérrez y Jaime Rodrigo Véjar Carvajal, y el juez suplente Rogelio Inostroza Rivera, se realizó la audiencia de juicio oral, en contra del acusado JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUYER, cédula nacional de identidad 7.784.148-2, trabajador pesquero ocasional, sin domicilio fijo, nacido en Talcahuano, el 6 de marzo de 1957, de actuales 64 años, soltero, con escolaridad hasta cuarto básico, pero no sabe leer ni escribir, actualmente en prisión preventiva en el Centro Penitenciario de Concepción.

El acusado fue representado por la defensora penal pública Ximena Alicia Pulgar Jara.

El Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Paolo Enrique Muñoz Olguín.

SEGUNDO. Que los hechos objeto del juicio, contenidos en la acusación fiscal son los siguientes:

"El día 27 de octubre de 2020 a las 17.00 horas aproximadamente, en la vía pública calle Barros Arana esquina con calle Serrano de la ciudad y comuna de Concepción, el acusado Juan Antonio Fernández Ruyer luego de una discusión con el ofendido, actuando con ánimo homicida y portando un arma blanca del tipo cuchillo apuñaló a la víctima Juan Alejandro Garcés Sáez en el tórax ocasionándole la muerte por herida penetrante torácica que afectó órganos vitales. Las lesiones fueron recientes, vitales y necesariamente mortales".

A juicio el Ministerio Público, los hechos descritos son constitutivos del delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391 número 2 del Código Penal, en grado de desarrollo consumado y en el que cupo al acusado participación en calidad de autor directo, en los términos del artículo 15 número 1 del referido código.

En la acusación, el ente persecutor señaló que favorecían al acusado las circunstancias atenuantes del artículo 11 números 8 y 9 del Código Penal, por lo que solicitó se imponga la pena de diez años de presidio

menor en su grado mínimo, accesorias legales y las costas de la causa, además de disponer la incorporación de su huella genética en el Registro de Condenados del Servicio de Registro Civil e Identificación.

TERCERO. Que, en su alegato de apertura, el representante del Ministerio Público sostuvo que, el 27 de octubre de 2020, en horas de la tarde, estaban en la vía pública el acusado y la víctima Juan Garcés Sáez, en la intersección de las calles Serrano con Barros Arana. Eran ambas personas en situación de calle, por lo que estaban la mayor parte del tiempo en ese sector, donde también pernoctaban.

Tuvieron una discusión, donde la víctima le reprocha tener conductas sexualizadas y situaciones del pasado, que podrían haber sido constitutivas de delitos de connotación sexual.

La discusión era presenciada por personas que iban como pasajeros o empleados de un hotel que está en las inmediaciones del lugar, en calle Serrano, quienes pudieron escuchar la discusión entre personas en situación de calle.

En algún momento, el acusado, cansado de las imputaciones que se le hacía, usando un cuchillo de cocina con serrucho, agrede a la víctima y le propina herida penetrante en el tórax, afectando órganos vitales, como el pulmón, arteria aorta y corazón, produciendo la muerte, ya que no se podía salvar a la víctima, ni aun con atención inmediata.

Luego de los hechos, el hechor no huye del lugar, permanece ahí. Llegan personas a auxiliar a la víctima, infructuosamente. También llegó personal policial.

El acusado se mantuvo ahí, no obstante las limitaciones que puedan afectarlo, reconociendo que la víctima lo estuvo molestando toda la tarde, que le dio rabia y lo apuñaló.

Ello se unió a los relatos de los pasajeros del hotel, motivó la detención.

Por estar en el lugar, y reconocer los hechos a Carabineros, motiva el reconocimiento de las atenuantes del artículo 11 números 8 y 9, pese a no haber posterior declaración formal en la etapa de investigación.

Depondrán los pasajeros del hotel, sobre lo que se escuchó decir a cada involucrado, las características físicas y vestimenta de cada uno, lo que hace el acusado antes y después de la discusión. También depondrán sobre si era la primera vez que veían al acusado o no.

El testigo Gastón Ramos depondrá sobre el elemento cortopunzante utilizado para la comisión del ilícito.

También depondrán los funcionarios del OS9 de Carabineros, sobre las diligencias de investigación y levantamiento de evidencia consistente en grabaciones de cámaras cercanas al sitio del suceso, lo que, unido a las declaraciones, permitirá establecer la dinámica de los hechos.

Declarará el médico legista para establecer cómo las heridas eran necesariamente mortales.

Se establecerá más allá de toda duda razonable la existencia del delito de homicidio simple y la participación del acusado, las atenuantes del artículo 11 números 8 y 9 del Código Penal, más allá del debate de la concurrencia de eximente incompleta; por lo que adelantó que al final del juicio se pediría la dictación de sentencia condenatoria.

CUARTO. Que, en su alegato de apertura, la defensa se refirió al abandono, precariedad y sobrevivencia, que definen la vida del acusado. Señaló que la vida en la calle es difícil y obliga a seguir reglas distintas a las de los otros aspectos de la vida.

El acusado viene de una familia donde su padre trabaja en el puerto esporádicamente y la madre era dueña de casa. Tuvo escasos niveles de afecto y nula educación. Solo asistió a enseñanza básica, siendo actualmente analfabeto.

La madre vivía en pobreza extrema y tenía deficiencia mental, abandonando a la familia y dejando a los hijos al cuidado de otras personas. El acusado quedó bajo el cuidado de su padre, de escasa escolaridad y capacidad afectiva, con alto consumo de alcohol.

Así, el acusado queda abandonado a los 12 años, forzado a vivir en la calle, teniendo consumo de alcohol desde los 13 años, en forma ininterrumpida.

Se vio expuesto a diversas situaciones traumáticas. Debió aprender a sobrevivir en la calle, donde prima la

ley del más fuerte. El más débil, debe buscar las formas de proveerse de alimentos.

En ese contexto, sufrió golpizas de diversas personas, desde su niñez. También se mostrará el contexto de peleas y discusiones, muchas veces para proteger su territorio y pertenencias, con consumo de alcohol y drogas.

Las personas en situación de calle viven en exclusión social. El acusado desarrolla deterioro mental, sumado a su merma física y mental. Se observa por terceros y por los peritos que lo han examinado.

Sus circunstancias disminuyen sus niveles cognitivos, y capacidad de comprensión y solicitará se considere de esa forma por el tribunal.

El acusado tiene 64 años, está arrepentido de lo ocurrido, expresando que la acción fue cometida por hostigamientos, sin pensar en las consecuencias, lo que fue reconocido el día de los hechos a los funcionarios policiales.

Lo ratificará el acusado, con sus dificultades propias, declarando en el juicio.

Señala que solicitará, al final del juicio, el reconocimiento de las dos atenuantes que figuran en el auto de apertura y la eximente incompleta del artículo 11 número 1, en relación al 10 número 1 del Código Penal.

QUINTO. Que, advertido de su derecho a guardar silencio y de las consecuencias que podría tener no hacerlo, el acusado renunció a este derecho, prestando declaración en el juicio oral, señalando que se acuerda dónde estuvo en la calle, que él llegó y venía a pegarle. Tuvieron un alegato. Estaba curado, sacó el cuchillo y no se dio cuenta donde le pegó.

Él siempre le pegaba. Le dio pena, se quedó ahí mismo, un carabinero le pregunta qué hizo, él se entrega porque cometió un delito y lo llevan a la Primera Comisaría.

Interrogado por el fiscal, señala que estaba en calle Serrano, porque tenía un colchón que ponía en ese lugar.

Tuvo una pelea con Juan Garcés Sáez, no se dio cuenta de dónde le pegó. Él llegaba de vez en cuando a

ese sector. Lo conocía poco, hace algunas pocas semanas, lo conocía como el 'Juano', hacía palomas de las palmeras, era artesano y siempre tenía a mano un cortaplumas.

Él siempre lo molestaba cuando se ponía a pedir plata, no lo dejaba tranquilo, le pegaba y lo tenía aburrido. Pedía plata a la gente que bajaba del tren.

Ese día tuvo un alegato con él, en la tarde, no recuerda a qué hora. Duró una media hora la discusión. Tenía un cuchillo de cocina, con mango de madera y hoja con dientes y punta fina, como de aguja. Con ese cuchillo, le dio una puñalada, no supo dónde, pues estaba curado. Le dio pena matarlo, por eso se entregó cuando llegaron los carabineros.

El cuchillo lo dejó en la calle.

En ese momento no se dio cuenta que lo había matado, sino más tarde, cuando reaccionó, pues estaba curado.

A él le salía sangre del pecho.

Se queda hasta que llegan los carabineros, y se entrega, porque había cometido un delito. Les dijo que le dio rabia y le dio una puñalada. Lo llevaron a la Primera Comisaría y desde ahí, ha estado preso en la cárcel del Biobío.

En esa fecha, tenía barba y pelo largo, que los usaba para pedir plata. Usaba un gorro, una parca con chiporro, zapatillas color café.

Se le exhibe fotografía número 8 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura, donde reconoce que la persona que aparece en ella es él mismo, con el aspecto que tenía el día de los hechos.

En la fotografía número 13, reconoce el cuchillo que tenía ese día y que dejó en la calle.

Interrogado por la defensa, señala que vivía en calle Serrano, donde estaba el departamento, tenía un colchón, pedía plata y se compraba comida.

Vivió ahí unos cuatro a seis meses. Ese día, estaba curado. Bebe alcohol desde los 13 años, nunca ha tenido tratamiento.

Estuvo en hospital, pero por una neumonía.

No se acuerda si en el penal lo ha visto algún médico.

Cuando ocurre el hecho, le dio pena, se quedó en el lugar, no se movió. Se queda hasta que llega la patrulla, cuando se entrega a carabineros.

Tenía problemas con la víctima, que siempre lo molestaba y lo mandaba a pedir plata a otro lado, para él quedarse ahí.

Sus padres murieron. Vive solo en la calle.

SEXTO. Prueba del Ministerio Público. Que, a fin de justificar los fundamentos facticos de su acusación el acusador presentó la siguiente prueba:

I. Testimonial:

1. **YASLIM ELIZABETH LARA SOTO.** Sobre los hechos que motivan su comparecencia, indica que, por su ocupación de laboratorista dental, durante el año 2020 trabajó en una clínica dental de calle Barros Arana con Serrano, en Concepción, de 10 a 18 horas. Prestó servicios en ese lugar por unos seis meses.

Los hechos ocurren en octubre de 2020, no recuerda día exacto. Al llegar a su trabajo, siempre veía a una persona que vivía en ese sector, en situación de calle. Al salir de su trabajo, se escuchaba una discusión entre personas que vivían en la calle, los podía escuchar por la ventana. A la otra persona no la conocía, pero lo podría describir.

No vio qué ocurrió, solo supo cuando llegó la PDI a la clínica, informando lo ocurrido.

Su ventana daba hacia calle Serrano, estaba en el segundo piso.

En el lugar, había una persona en situación de calle, estaba lleno de cartones y colchones y frazadas. Tenía una chaqueta larga, canoso y de barba larga. Se veía mayor.

Cree que cerca del lugar, en una especie de kiosko, vendían alcohol y siempre se le veía alrededor, consumiendo. Siempre estaba en ese sector.

Se le exhibe fotografía número 8 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura. Reconoce que es la persona que vivía en la esquina en situación de calle.

Cerca de las cinco de la tarde, se escuchó la discusión, con una persona que tenía una polera sin mangas y una mochila. Discuten por calle Serrano, pues la persona de la mochila estaba por Serrano y la otra, justo en la esquina. Se escuchan hartos gritos, y cree que la persona de mochila acusaba a la persona de la foto de haber abusado de alguien.

No recuerda cuánto duró esta discusión.

Cree recordar que la persona en situación de calle tenía algo en sus manos, no puede precisar qué era, pero parecía de aluminio y no podría decir si es que era un arma u otra cosa.

Supo que había ocurrido un crimen, pues las otras personas que trabajaban en la clínica dijeron que había carabineros. Había mucha gente acumulada, los carabineros pusieron una carpa y le fueron a tomar declaración, pues ella se mantuvo trabajando.

La persona de la fotografía estaba en el lugar, con Carabineros. La otra persona, que tenía la mochila, no la veía. Después, las personas que trabajaban en la clínica dijeron que habían matado a alguien, y supusieron que era la persona que discutía con la persona en situación de calle.

Cuando declara en Carabineros, dijo que la persona tenía algo en las manos y lo reconoce. Sobre lo que tenía en las manos, dijo que era un elemento metálico.

Interrogada por la defensa, indica que la persona en situación de calle llevaba tiempo pernoctando en el mismo lugar, siempre lo veía al llegar a trabajar. El sector era frecuentado por más personas que vivían en la calle. Había colchonetas y frazadas.

Cuando estaba trabajando, escucha una discusión, pero no sabe si la otra persona estaba en situación de calle, pues no lo había visto antes.

Se escuchaban garabatos, gritos y era la persona de la mochila quien acusaba al otro. No vio contacto físico entre esas personas, ni agresiones.

Lo que supo después fue que hubo un homicidio, pero no la identidad del fallecido, y solo supone que fue la persona que conocía la que cometió el delito, porque es lo que comentaron en la clínica.

2. **CATALINA ANDREA DIAZ MUÑOZ**. Se desempeña como profesora de inglés.

Sobre los hechos de 27 de octubre de 2020, indica que en la tarde, un caballero que vivía en la esquina discutía con otro hombre de bandana, polera y mochila, que le gritaba que era un abusador y violador. El caballero de la bandana deja su mochila en el suelo y el otro tenía en su mano un objeto grande y metálico.

Al rato, llega carabineros y hacen RCP al de la bandana.

Ella trabajaba en la esquina del frente de donde fue la discusión y la vio desde la ventana. Su ventana estaba justo en la esquina de Serrano con Barros, en el segundo piso.

Ubicaba a la persona que vivía en la calle, tenía todas sus cosas ahí, para taparse, lo veía cuando llegaba y se iba de su trabajo. Vivía justo en la esquina.

Tenía barba y pelo largos, con mucha ropa, casaca larga, adulto mayor. No sabe si tenía recursos para vivir. Nunca lo vio consumiendo alcohol, pero se notaba que estaba ebrio. Lo vio ahí por unos ocho meses, que es el tiempo que trabajó en el lugar.

Se le exhibe fotografía número 8 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura. Reconoce que es la persona que vivía en la esquina de Barros con Serrano, que estaba discutiendo ese día.

La otra persona tenía una bandana y lentes de sol. Los hechos fueron en la tarde, después de las cuatro de la tarde.

La otra persona le decía que era un abusador y un violador.

La persona de la fotografía tenía un objeto largo, rectangular, metálico.

Cuando terminó la discusión, vuelve a trabajar y un rato después, ve que la otra persona estaba en el suelo y llegaron carabineros, vio que le estaban haciendo reanimación, carabineros le hacía maniobras de resucitación. Estaba tirado en el suelo, por calle Barros, no sabe dónde estaba la otra persona involucrada.

Carabineros llegó a su lugar de trabajo, unos quince minutos después, y declaró lo mismo que ha dicho ahora.

Interrogada por la defensa, indica que vio a dos personas discutiendo, una de ellas la ubicaba como indigente y la veía hace unos ocho meses pernoctando en el lugar, con carro y cosas para protegerse.

No lo veía como una persona agresiva, sino más bien tranquila.

Solo fue testigo de la discusión, pero no vio contacto físico entre las dos personas, ninguna agresión. Luego, se enteró que había una persona que estaban reanimando, que sería la persona de la bandana, pero no sabe quién la agredió. No tiene certeza del agresor, porque no estaba en el lugar.

Sobre la persona indigente, lo vio ebrio en varias ocasiones.

Declaró ante carabineros que era habitual ver discusiones entre personas en situación de calle.

3. **GASTÓN GERARDO RAMOS CID**. Sobre los hechos materia de su comparecencia, indica que, al 27 de octubre de 2020, estaba supervisando una obra en la Fiscalía Regional de Concepción, hospedado en el Hotel Concepción de calle Serrano con Barros Arana.

En relación a los hechos, dice que salió a una farmacia, por Barros Arana al norte, ve una discusión entre dos personas, en una esquina, pide permiso para pasar.

Ve una persona sentada, que le ofreció parches curita y otra parada cerca de él.

Al volver de la farmacia, ve que la persona que antes estaba sentada, ahora estaba tirada, con mucha sangre y la otra persona, estaba parado a su lado, guardando un cuchillo en su chaqueta.

Alguien llamó a Carabineros y ve a un joven ayudar a la persona que estaba tirada, para detener la sangre que salía profusamente. La persona del cuchillo le gritaba 'me tenías cansado' y le pidió un cigarro.

La persona que estaba sentada, era robusta y joven, más joven que quien discutía con él. La otra persona era alta, canosa, de barba y de aspecto andrajoso.

Ese día estaba semi nublado, cree que era domingo y circulaba muy poca gente.

La primera vez que pasó, estuvo a unos tres metros de la persona del cuchillo. Cuando le pidió cigarros, lo tuvo a un metro y medio, aproximadamente.

Se le exhibe fotografía número 8 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura. Reconoce que es la persona más alta que describió y que le pidió cigarros.

Cuando pasó hacia la farmacia, estaban discutiendo fuertemente. Cuando vuelve, el sujeto de la fotografía estaba a corta distancia de la persona herida, que estaba de espalda, y le estaba diciendo '*me tenías cansado, me tenía cabreado*'. El cuchillo era uno de mesa, con serrucho.

Se le exhibe fotografía número 13 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura. Reconoce que es el tipo de cuchillo que vio que el sujeto de la fotografía se estaba guardando en la chaqueta, y como lo guardó de punta, por la presión, pasó hacia abajo y quedó asomada la hoja del cuchillo.

De ida y de vuelta, vio a dos personas discutiendo. Cuando vuelve a ver al herido, ve a una persona joven poniendo un trapo a la altura del corazón, para detener la sangre abundante que salía hacia el costado izquierdo. La persona herida no decía ni hacía nada.

La persona joven hace gesto a Carabineros, que pasaban por ahí. Al llegar al hotel, le dice a la recepcionista lo que vio. Sabe que llegaron bomberos, ambulancia y carabineros.

Se fue a su habitación y una media hora después, le avisan que carabineros del OS9 querían hablar con él.

Cuando llegaron los carabineros, rodearon al herido y la persona que tenía el cuchillo, que permaneció en el lugar.

Interrogado por la defensa, señala que quienes discuten, son dos personas del sexo masculino. Uno de ellos, le ofrece parches, que es a quien vio tendido en el suelo, al volver.

A carabineros les dijo que, en su concepto, ambas eran personas en situación de calle. Cuando vuelve,

escucha que el del cuchillo le dice al otro 'me tenis cabreado', ve a uno en el piso y al otro de pie.

El que estaba de pie, estaba muy cerca del otro y no intentó huir. Ve que lo rodearon los carabineros. Antes, le pidió un cigarrillo.

No vio contacto ni agresión entre las dos personas. No sabe quién fue quien agredió al que estaba en el piso, solo lo supone, porque vio la acción de guardarse el cuchillo.

Luego, vio a carabineros y ambulancia llegar al lugar.

4. **JORGE EDUARDO DÍAZ LEÓN**. Trabaja como guardia de seguridad.

El 27 de octubre de 2020, estaba trabajando en Serrano con Barros, en Concepción.

Ese día, estaba trabajando en la Seremi de Agricultura, haciendo el control de entrada y salida del público y funcionarios del lugar.

Lo que vio es que, a la entrada del edificio, había dos personas, una en el suelo y la otra por el frente, uno le decía que estuvo manoseando y el otro le decía que le iba a pegar si le seguía diciendo leseras.

Un rato después, oyó gente diciendo que lo habían matado, y se asomó a mirar.

La persona que estaba más cerca del hotel, era indigente, de barba y canoso, con una chaqueta larga. Siempre lo veía pasar por ahí, pues dormía en la esquina del edificio, hace meses, antes de los hechos.

Se le exhibe fotografía número 8 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura. Reconoce que es la persona que vivía en la esquina de Barros con Serrano, que estaba discutiendo ese día.

La otra persona era más joven, no lo conocía, pues no lo había visto antes. Esta persona le gritaba a la persona de la foto que lo había estado 'manoseando anoche', gritaba groserías. También le dijo que era un violador.

El señor de barba le decía al otro que le iba a pegar.

Un rato después, las personas del lugar decían que habían apuñalado a uno, pero no tenía claridad de lo ocurrido. Cuando salió, ya estaba la ambulancia en el lugar. La persona de barba estaba en el lugar, ya había llegado Carabineros. Quien discutía con él, estaba rodeado de gente, no vio si estaba en el suelo.

Interrogado por la defensa, indica que sobre la persona que reconoce en la foto, es una persona en situación de calle, que siempre estaba en Serrano con Barros, cerca de su lugar de trabajo. Él dormía en el lugar.

Pudo escuchar la discusión.

El mismo día, prestó declaración ante OS9, diciendo que el más joven insultaba a la persona de barba. Luego, volvió a su puesto de trabajo, los pierde de vista y no vio lo que había pasado.

No vio agresiones ni contacto físico entre las personas que discutían. De lo ocurrido, desconoce quién ocasionó la agresión, no sabe quién apuñala a quien estaba en el piso.

5. **CECILIA CLAUDINA SILVA LÓPEZ**. Durante el año 2020, estaba en el Hotel Concepción, de calle Serrano.

El 27 de octubre de 2020, como a las 5.20 de la tarde, se sintió fuera del hotel, a dos individuos peleando. Al rato, llega un pasajero que le dice que la persona que conoce le enterró un cuchillo a quien discutía con él.

Escuchó la discusión, cuando la otra persona, a quien no conoce, le decía a quien sí conocía que lo había tocado en la noche.

Conoce al que enterró el cuchillo, pues pernoctaba en ese sector, en la calle, era de tez blanca, barba y canas.

Se le exhibe fotografía número 8 del set número 3 del acápite 'otros medios de prueba' del auto de apertura. Reconoce que es la persona que vivía en la esquina de Barros con Serrano, que es a quien conocía. Al que no conocía es al que discutía con él, que le dice a la persona de la foto que en la noche le había corrido manos.

Vio a la persona de la foto, pasar por fuera del hotel, que la pasaba a saludar. Al otro, no lo había visto antes, sino hasta que ocurre lo que está narrando.

El mismo día de los hechos, prestó declaración a Carabineros, les dijo que solo escuchó la discusión, pero no la vio.

Para efectos de revelar contradicción, el fiscal hace uso de la herramienta del artículo 332 del Código Procesal Penal, con la declaración prestada por la testigo ante Carabineros, el mismo día de los hechos. Hecho el ejercicio, aclara que no es que haya visto la discusión, sino que lo que escuchó fue la discusión y que cuando se asoma vio que una persona estaba herida.

En ese momento, no vio a la persona que ubicaba, solo a una persona tirada. Luego, lo vio al lado de unos carabineros.

Interrogada por la defensa, indica que era recepcionista del Hotel Concepción, a la fecha de los hechos.

Conocía a la persona que vivía en situación de calle, pues todos los días la iba a saludar al hotel. No era una persona agresiva. Tenía sus pertenencias en ese lugar y pedía monedas a los transeúntes para poder mantenerse.

Escuchó que se insultaba con otra persona. No sabe cómo era esa otra persona. Le decían que había 'corrido manos'.

Sabe que esa persona era alcohólica, así se lo dijo a los carabineros.

No vio contacto físico entre esas personas, no vio agresiones, no presencié los hechos. Lo dicho sobre un homicidio, lo supo a través del comentario de un pasajero. No se acercó al lugar, pues estaba custodiado por carabineros.

6. **JOSÉ ANTONIO PINCHEIRA QUIROGA**. Sargento segundo de Carabineros. Se desempeña en OS9 regional Biobío, desde enero de 2019. Realiza labores investigativas.

Viene a declarar por el delito de homicidio imputado a Juan Fernández Ruyer contra Juan Garces Sáez.

El 27 de octubre de 2020, son requeridos por el Ministerio Público para realizar las primeras

diligencias por delito que se acababa de cometer, en Barros Arana 111, Concepción.

Van con jefe de sección, patrulla con 4 funcionarios más. Obtienen ocho declaraciones, además de la incautación de un video donde se ve la acción.

De las declaraciones, todos dicen ver a dos personas indigentes, discutiendo en el lugar, no viendo cuando el imputado le propina la lesión a la víctima, pero sí hay dos declaraciones importantes, la del sargento Nelson Abner, no recuerda sus apellidos y la de un testigo, de nombre Gastón, que se hospedaba en el hotel aledaño.

Según el funcionario aprehensor, el imputado le manifiesta que agredió a la víctima porque habían estado discutiendo toda la tarde y lo tenía aburrido, por lo que le propina una puñalada.

El otro testigo, dijo que fue a comprar a una farmacia, ve al imputado guardar en sus ropas un cuchillo dentado, tipo serrucho.

Dentro de las otras diligencias, se analiza el video donde se ve la acción en que el imputado le propina la lesión a la víctima.

El llamado para constituirse en el sitio del suceso es del fiscal de turno. El sitio era en Barros Arana número 111, esquina con Serrano.

La persona afectada estaba fallecida, situada en la acera, a un costado de un edificio correspondiente a un hotel.

Al llegar, estaban los funcionarios aprehensores, Sargento Nelson Abner y un cabo primero de apellido Robles, de la primera comisaría de Concepción.

También llegaron funcionarios de Labocar, al mismo sitio de Barros con Serrano, a cargo de la teniente Madelyn Guzmán. Hicieron la revisión del cuerpo, tomaron fotografías de cuerpo y vestimentas y del imputado, todas tomadas en el sitio de Barros Arana con Serrano.

Sobre los testigos, se ubicaron en una clínica dental que está por calle Serrano, la recepcionista del hotel, un guardia de un edificio frente al hotel, por Serrano, cree que es del Ministerio de Economía, y un pasajero del hotel, de nombre Gastón. No recuerda el nombre del hotel, pero estaba justo en la esquina de Barros Arana con Serrano.

Ninguno de los testigos vio el momento de la agresión, pero entregan información relevante, señalando que, durante la tarde, ambos involucrados estuvieron discutiendo por un lapso determinado, dando características físicas de estas personas, una persona de estatura media, barba canosa, vestimenta andrajosa, al parecer, indigente. Discutía con otra persona que era de unos 52 años, durante la tarde, diciendo que lo había manoseado durante la noche.

La persona de aspecto andrajoso había sido detenida por los funcionarios aprehensores. Y quien discutía con él, estaba fallecido en la acera de la intersección antedicha.

El funcionario de la primera comisaría que dio información importante lo conoce como Nelson Abner.

Se le exhibe set de 17 fotografías (exhibe solo hasta la número 8), signado con el número tres del acápite otros medios de prueba del auto de apertura. En la foto uno, corresponde al lugar exacto del suceso, de calle Barros Arana 111, con la manta que cubría el cuerpo de la víctima.

En la foto dos, se aprecia a la víctima, con la gasa y apósitos que dejó el personal del Samu.

En la foto tres, se ve el rostro de la víctima.

En la foto cuatro, se ve la zona dorsal de la víctima.

En la foto cinco, se ven las heridas de la víctima, con dimensiones de 1,5 cm.

En la foto seis, se aprecia personal de Labocar realizando el peritaje a las heridas de la víctima. Se ve un corte lineal en el cuerpo de la víctima.

En la foto siete, se ve a personal de Labocar tomando huellas dactilares de la víctima.

En la foto ocho, se ve al imputado.

El día de los hechos, no tuvo contacto con el imputado.

Interrogado por la defensa, indica que estuvo a cargo del informe de las diligencias realizadas.

Recibió un video de cámaras de seguridad de un domicilio particular, levantan evidencias y empadronan testigos.

También recibe el informe de los funcionarios de la primera comisaría de Concepción. Ellos le comunican que Juan Fernández tenía la calidad de imputado, pues habría señalado a funcionarios policiales que él había apuñalado a la víctima, confiesa el delito.

Al llegar al sitio del suceso, ya estaba en el furgón policial.

Según la información recabada, eran dos personas que habían discutido, ambos en situación de calle, tanto imputado como víctima. Empadronó a unos ocho testigos, entre civiles y funcionarios policiales. Ninguno de ellos vio una agresión entre las personas, solo escucharon una discusión.

El único que vio al imputado portar un elemento, habría sido Gastón, pasajero del hotel, que dijo que lo vio guardarse un cuchillo tipo serrucho.

Se le encargó tomar declaración al imputado, pero en el acta se consigna que no sabe leer ni escribir, por lo que no se le toma la declaración.

El único antecedente relativo a la participación es la confesión al funcionario policial y el análisis del video.

Del sitio del suceso, se tomó muestras biológicas y levantó una casaca, todo por Labocar, no oponiendo resistencia y dejándose fotografiar.

En cuanto a las hipótesis conclusivas, en el informe se refiere que hubo discusión entre ambas personas, lo que es habitual entre personas en situación de calle, como eran los involucrados.

No recuerda si decía que tenía rasgos de ser persona alcohólica. Para efectos de refrescar memoria, se le exhibe el informe elaborado por el testigo, recuerda haber señalado que pernoctaba en el alero del Hotel Concepción y que tenía rasgos de ser alcohólico.

Fue entregado por personal de la primera comisaría y no intentó darse a la fuga.

7. **NELSON ABNER SALGADO GONZALEZ**. Sobre el motivo de su comparecencia al juicio, indica que, como funcionario

de la primera comisaría de Concepción, cuadrante uno del sector centro, alrededor de las 17.25 horas, recibe comunicado de Cenco, para constituirse en calle Barros con Serrano.

En el lugar, verifican que hay una persona lesionada, con bastantes civiles alrededor. Ven que estaba con una lesión a la altura del tórax y le estaban prestando auxilio.

A los diez minutos, llegan bomberos y también piden ambulancia. Se retira un poco, para que bomberos presten auxilio y se acerca a otra persona indigente, en situación de calle, afirmado en la puerta del hotel que está en el lugar.

Le dijo que la persona lesionada lo estuvo molestando toda la tarde y de la rabia, le dio una puñalada. Le pregunta por segunda vez, y le reitera lo mismo. Le avisa al colega y se le leyeron sus derechos y lo detuvieron.

El colega que lo acompañaba era el cabo Robles. Se trasladaban en vehículo policial y no iban más funcionarios.

Se constituyeron en calle Barros con Serrano. Había bastante gente ayudando a la persona lesionada.

El comunicado fue a las 17.25 aproximadamente.

Él también intentó reanimar al herido, que estaba por calle Barros. La persona no reaccionaba.

Se demoró la llegada de bomberos y ambulancia.

Se dio cuenta al fiscal de turno, luego llegó OS9 de Carabineros y médico legal.

Por calle Barros, estaba la persona que reconocía haber provocado la lesión, a unos cuatro metros del lugar en que estaba el lesionado. Se trataba de una persona en situación de calle, delgada, pelo largo, barba, con un abrigo negro. Esa persona siempre se veía en el lugar, lo había visto antes en el sector, cuando realizaba rondas por ahí.

Se le exhibe set número tres del acápite otros medios de prueba, fotografía número ocho. Se trata de la persona con quien habló en el lugar del procedimiento, que manifestó haber agredido a la persona lesionada, a quien detuvo en el lugar. No recuerda su nombre.

Trasladaron al detenido a la Primera Comisaría. Lo reconoce en la sala del tribunal, indica su vestimenta, se trata del acusado presente en la sala de audiencias.

En el sitio del suceso, vieron las cosas del imputado, que estaban en un carro de supermercado. El funcionario Robles encontró un cuchillo con cache de madera color café, con rastros de sangre. Lo tomó y quedó con cadena de custodia.

Se le exhibe set fotográfico número 1 de la letra D del auto de apertura, reconoce que es el cuchillo que encontró el funcionario Robles, que es quien tomó la fotografía.

En la foto dos, reconoce la punta de la hoja del cuchillo.

En la foto tres, se ve el cuchillo color café, con una regla que toma las medidas del cuchillo, que medía unos 21 centímetros.

El elemento levantado por Robles se entregó con cadena de custodia a OS9.

Interrogado por la defensa, indica que el día de los hechos, estuvo a cargo del procedimiento y sus actuaciones constan en el parte policial respectivo, elaborado el mismo día de la detención del imputado.

Sobre el lugar en que estaba el imputado, era en el mismo sitio del suceso, donde se encontraba la víctima agredida, no intentó huir del lugar, estaba en situación de calle.

Lo ubicaba, pues solía estar en esa intersección, junto a sus enseres personales. No sabe si la víctima estaba en situación de calle, no recuerda si en el informe se dice eso.

Al acercarse al imputado, espontáneamente le dice que la víctima lo estuvo molestando toda la tarde y que le dio rabia, y por eso lo apuñaló. Por eso, se procede a su detención.

Lo dicho espontáneamente quedó consignado en el parte policial, pero no se le tomó declaración formal al imputado.

Se acercó al lugar cuando el cabo Robles levanta las especies del imputado, encontrando el cuchillo. No lo

portaba el imputado, él no dijo con qué lo había agredido. Levantado, se entrega al OS9.

Era un cuchillo de hoja.

Luego de eso, se termina el procedimiento a su cargo. Quedan trabajando en el lugar funcionarios de Labocar y OS9. Cree que Robles tomó el nombre de algunos testigos, personalmente no le tocó interrogar testigos, eso lo hicieron funcionarios del OS9.

La detención fue en base al reconocimiento del imputado. Se verifica su identidad con la cédula que él porta. No tenía órdenes de detención pendientes, se le leyeron sus derechos.

II. Pericial:

1. **MADELYN JEAN VICTORIA GUZMAN MARDONES**, Capitán de Carabineros, Perito Criminalístico de LABOCAR.

Expone sobre lo ocurrido el 27 de octubre de 2020. Se solicitó la asistencia del equipo pericial, junto con otro funcionario y un médico. En calle Aníbal Pinto a la altura del número 111 ven zona delimitada y bulto con una frazada.

Retirada la frazada, ven una manta térmica que cubre cadáver de hombre adulto, con señales de atención médica, con tórax con fluido de aspecto hemático, con torso descubierto. Tenía un pantalón de mezclilla y zapatillas color gris.

Junto al cadáver, se encuentran dos poleras sobrepuestas, una negra y otra gris, con daño en la zona frontal, costado superior derecho, que fueron levantadas y rotuladas.

Posteriormente, se hace examen de cadáver por el médico asesor criminalístico, con las conclusiones puestas en su informe pericial.

No se encuentran otros elementos de relevancia pericial.

Acuden a cuartel de sección OS9 de Concepción. Analizan muestras tomadas a Juan Fernández, previa autorización dada por éste.

Se inspeccionan prendas de vestir y extremidades, retirando la casaca color negro para análisis de laboratorio. Luego, levantan muestras desde la extremidad superior izquierda de aspecto hemático.

También se levanta muestra de posible material biológico depositado, y desde la planta de su zapatilla, se levanta muestra de material biológico.

Recibieron, de parte del personal a cargo del procedimiento, un cuchillo marca Tramontina de hoja lisa de 11,5 cm y grosor de 1,6 cm; mango de madera.

Verifican identidad del occiso, con la ficha enviada a Registro Civil, informando que se trata de Juan Garcés Sáez.

Sus conclusiones, tomadas a partir de lo informado por perito bioquímico y médico, más lo observado en el lugar del suceso, determinando que la lesión cortopunzante que presentaba el occiso en hemitórax derecho era concordante con el daño de las poleras, y a su vez con el arma incautada, en cuanto a tamaño y forma. Asimismo, determina que es altamente probable que haya sido el elemento que produjo las lesiones.

Además, determina que necesariamente fue una acción directa a corta distancia y que el filo del cuchillo estaba levemente hacia la zona inferior del occiso.

Interrogada por el fiscal, señala que trabajó en Labocar de Concepción, por cinco años, y un año más en Coquimbo.

Es perito criminalístico, habiendo cursado especialidad en su institución, impartida en el departamento central, realizando estudios de sitio de suceso. Esos estudios son de un año, cursados en 2016. Desde entonces, ha realizado diversas pericias de sitio de suceso, especializada en áreas como incendio y otras, ya que año a año los van especializando.

Se le exhibe set de veinticinco fotografías incluidas en informe pericial del sitio del suceso 1025-2020 de LABOCAR.

La foto uno es del sitio del suceso, calle Aníbal Pinto, a la altura del 111, con el cadáver cubierto por una manta.

La foto dos, es del cadáver de Juan Garcés Sáez, cubierto por un plástico, luego de la atención médica recibida en el lugar.

La foto tres, corresponde al cuerpo completo de Juan Fernández Ruyer, imputado de los hechos imputados. Tenía la calidad de imputado, pues se le atribuye la autoría

del homicidio, estaba en custodia del OS9. La fotografía es tomada en el cuartel del OS9.

La foto cuatro, es de la ubicación del cadáver, cubierto por una frazada, en la vía pública.

La foto cinco, son especies ubicadas cerca del cadáver, con un bolso, una mochila, y un chaleco reflectante, además de un trozo de tela de color verde.

La foto seis corresponde a lo que contenía el bolso con elementos de uso común, sin relevancia pericial. Son parches curitas, usadas en heridas normalmente. Están con la caja que los mantenía, junto con otras especies personales. Estaban contiguas al cuerpo del occiso.

La foto siete, es el contenido de la mochila, con prendas de vestir y elementos de uso personal.

La foto ocho, es el cadáver cubierto con manta térmica y bajo éste, un trozo plástico celeste.

La foto nueve, es del cadáver cubierto con un plástico celeste, dos poleras, los parches y algunos otros elementos propios de la atención médica y manchas del cadáver.

La foto diez, es del cadáver, con los restos de elementos provenientes de la atención médica recibida en el lugar, como gasa y electrodos.

La foto once es del tubo inserto en la boca, parche de gasa en hemitórax derecho, electrodos, la polera que habría portado el occiso.

La foto doce son las extremidades inferiores, pantalón de mezclilla y zapatillas de color gris.

La foto trece es de la polera gris y la negra, superpuestas.

La foto catorce es el levantamiento de las prendas de vestir.

La foto quince es la intersección aledaña a donde se encontró el cadáver.

La foto dieciséis es la misma intersección, con levantamiento de especies, con colchones y bolsos, pero nada de relevancia pericial. Había ropa de cama en un carro de supermercado, cartones, propias de cuando alguien pernocta en la calle.

La foto diecisiete es la vista del imputado Juan Fernández Ruyer.

La foto dieciocho, es la vista del mismo imputado.

La foto diecinueve es de la casaca que portaba el imputado, al momento de la pericia.

La foto veinte es la vista del imputado, mostrando extremidades superiores, sin la casaca que llevaba antes.

La foto veintiuno es de las extremidades superiores del imputado, por zona superior.

La foto veintidós es del levantamiento de muestras del imputado, tomadas pues se observaron manchas de sangre, ubicadas en la mano.

La foto veintitrés es la toma de muestra debajo de las uñas.

La foto veinticuatro es la toma de muestra de debajo del calzado del imputado.

La foto veinticinco es la muestra del cuchillo Tramontina con hoja de 11,5 cm de largo y 1,5 cm de ancho y toma de madera. Recibido el cuchillo, se manda a laboratorio de bioquímica, para análisis en detalle.

Se le exhibe evidencia material signada con el número 8 del acápite de otros medios de prueba, consistente en un cuchillo, marca tramontina, empuñadura de madera, levantado desde el sitio del suceso con cadena de custodia número 4766745; es la especie que le entregó personal de la primera comisaría.

A raíz de haber ubicado un corte de mismas dimensiones del corte en la polera y herida del occiso, se concluye que es altamente probable que el elemento que produjo el corte y lesión sea el cuchillo recibido del personal de la primera comisaría.

Interrogada por la defensa, señala que la pericia es de 27 de octubre de 2020, aunque el informe dice noviembre, pero fue realizada en octubre. Se trata solo de un error de referencia.

Encontraron en el lugar especies acumuladas del imputado, que tenía aspecto de ser una persona en situación de calle, no le consta si pernoctaba en ese lugar.

En la intersección donde encuentran el cadáver, no se halló ninguna especie de interés pericial.

El imputado accedió verbalmente y por acta adjunta al informe pericial a la toma de muestras para realizar el peritaje. Fueron muestras de posibles evidencias biológicas, en las manos.

Había una herida en el dedo del imputado, de la mano donde tenía la mancha hemática. Se dejó constancia que la sangre en su mano podía ser propia o del occiso.

Se incautó una casaca de color negro, que es la que portaba el imputado. A las zapatillas solo se tomó muestra biológica.

Sobre el cuchillo, era de hoja lisa, no de serrucho.

El imputado no opuso resistencia alguna para la toma de muestras.

2. JUAN ALBERTO ZUCHEL MATAMALA, médico legista.

Sobre el peritaje realizado, indica que el 28 de octubre de 2020, en dependencias del Servicio Médico Legal, realiza autopsia de Juan Garcés Sáez, de 54 años de edad.

Su pareja indicó que fue agredido con objeto cortopunzante, alrededor de las 18 horas del día anterior, en Barros Arana con Serrano de Concepción, falleciendo unos minutos después.

Se trata de una persona de 1,70 metros de altura y peso de 80 kilos.

Tenía herida cortopenetrante en el pecho, a 5 cm de la tetilla en la parte superior del tórax, profundidad de 10 a 12 cm, por lo que elemento debe haber tenido longitud de 10 a 12 cm.

El recorrido de la herida es de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, perfora el pulmón derecho, pericardio y perfora la aorta, produciendo la muerte en unos cinco a diez minutos, como máximo.

La causa de muerte es herida penetrante torácica con objeto cortopunzante, de tipo homicida.

Tenía presencia de alcohol en la sangre, de 3,65 gramos por litro, es decir, en completo estado de ebriedad.

No tenía heridas en los nudillos ni en la palma, por lo que concluye que no fue una riña ni pelea cuerpo a cuerpo, que habrían dejado algún rastro en sus extremidades.

Interrogado por el fiscal, indica que la conviviente refirió que padecía alcoholismo, hipertensión y que estaba en situación de calle. Tenía cicatrices en los brazos, aparentemente autoinferidas, de las que habitualmente se hacen quienes tienen problemas con la justicia.

Respecto del examen del cadáver, lo más relevante es que no tenía signos de defensa, no había otras heridas coetáneas. El motivo de revisar si hay otras heridas, es determinar si pudo haberse defendido, no había heridas en los nudillos ni antebrazos.

Tenía una herida única, con objeto cortante, típica con bordes netos, a diferencia de los bordes contusos cuando es herida por golpe. Tenía unos 2 centímetros de ancho, a una altura de 1,13 metros desde el talón, aproximadamente, y desde la línea media, a unos 5 cm hacia la izquierda.

La trayectoria es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, de unos 10 centímetros de profundidad. Con la herida, como tenía bordes regulares, se concluye que sus bordes son lisos, no podría haber sido un machete, por ejemplo.

Penetra el tercer espacio intercostal, rompiendo nervios y músculos intercostales, perfora lóbulo superior de pulmón derecho, corazón y arteria aorta, que es lo que provoca la muerte en no más de diez minutos.

La herida del lóbulo superior derecho del pulmón, produce rápida ausencia de aire, produce angustia por falta de respiración. La lesión en el pericardio, se produce paro respiratorio, pero no fue éste el caso.

La lesión de la arteria aorta. Si se pierde dos litros de los cinco que tiene el cuerpo, se pierde el conocimiento. La sangre sale a chorros, se pierde 3 a 5 cm cúbicos por latido, y es más rápido si hay stress en la persona.

La pérdida de sangre produce gran debilidad, en piernas y brazos.

La lesión en el callao, produce muerte rápida, pues es donde nace la arteria aorta.

La víctima perdió unos dos litros de sangre, aproximadamente. La herida torácica era necesariamente mortal, pues no llega sangre a los tejidos y se produce paro cardiorrespiratorio.

Se le exhibe set número 4, del acápite otros medios de prueba. En la foto uno, se ve la cara del occiso con el número de inscripción de la autopsia.

En la foto dos, se ve la cara anterior superior del cuerpo, aun ensangrentado, tal como llegó al Servicio Médico Legal. Se ve la herida en la parte superior del tórax.

En la foto tres, se ve como penetra la herida y perfora el pulmón derecho.

En la foto cuatro, se ve la misma herida, siguiendo su recorrido hacia el callao, en la parte anterior del tórax, mediastino medio, que separa los pulmones, donde van la tráquea y el esófago.

Se le practica exámenes toxicológicos, pero no encontró el resultado. La alcoholemia arroja 3,65 gramos de alcohol por litro de sangre. Hay gente que fallece con 3 gramos de alcohol por litro de sangre. La cifra que tenía al momento de la autopsia es la que tenía al momento de fallecer, pues se paraliza la circulación en ese momento.

Interrogado por la defensa, indica que no hay diferencia en el resultado, si es que el examen se hubiera practicado a una persona viva.

3. **Informe de alcoholemia, número 10179/2020 correspondiente a la víctima Juan Alejandro Garcés Sáez,** suscrito por perito químico farmacéutico del Servicio Médico Legal de Concepción Francisco Javier Vega Yáñez, incorporado mediante la lectura de sus conclusiones, conforme lo dispuesto en el artículo 315 de Código Procesal Penal.

Concluye que el occiso presenta concentración de 3,65 gramos de alcohol por litro de sangre.

III. **Documental:**

1. Certificado de defunción de Juan Garcés Sáez. Indica que el fallecimiento ocurre el 27 de octubre de

2020 y, como causa de muerte, indica herida penetrante torácica.

2. Hoja de reanimación Samu, correspondiente a la víctima. Contiene la atención en el sitio del suceso y constatación de la muerte.

IV. Otros medios de prueba:

1. Set de seis fotografías de arma blanca tipo cuchillo, anexas a parte número 09216 de fecha 27 de octubre 2020 de la 1ra Comisaria de Carabineros de Concepción; de las que se incorporaron solo tres, mediante su exhibición a la perito, según lo expresado anteriormente.

2. Set de diecisiete fotografías del sitio suceso y levantamiento de evidencias incluidas en informe integrado n°348 de la Sección OS9; de las que se incorporaron las fotografías 1 a la 8 y la número 13, mediante su exhibición a peritos y testigos, según lo referido anteriormente.

3. Set de cinco fotografías, incluidas en un anexo informe de autopsia 543-2020 del Servicio Médico Legal; de las que se incorporaron solo las fotografías 1 a la 4, al perito Zuchel Matamala.

4. Set de veinticinco fotografías incluidas en informe pericial del sitio del suceso 1025-2020 de LABOCAR, incorporadas mediante su exhibición a la perito Guzmán Mardones.

5.- Un 01 cuchillo marca tramontina empuñadura de madera levantado desde el sitio del suceso NUE 4766745; incorporado mediante su exhibición a testigos y perito, según lo referido anteriormente.

SÉPTIMO. Que, por su parte, la defensa incorporó la siguiente prueba:

I. Pericial

1. **FÉLIX DANIEL SALAZAR SAZO**, psicólogo.

Realiza pericia encargada por la defensoría penal pública, al acusado, por el delito de homicidio.

Pretende establecer la existencia de algún daño orgánico que presente el imputado y evaluar capacidad intelectual y algunos rasgos de personalidad.

Se realizó la entrevista en el CCP El Manzano, en un total de siete horas de evaluación, en dos tandas, en noviembre de 2020.

La metodología consiste en una batería de test sicométricos, que dan cuenta de su personalidad, como el test de Hare, que mide sicopatías o sociopatías; el test de Wais de capacidad intelectual y se aplicaron parámetros internacionales para trastornos mentales, la americana y la europea.

Se hizo examen mental, en que, a los primeros minutos con el acusado, el perito se percata de un problema significativo de comprensión de lo que se le solicitaba en el momento, no comprendía cosas muy básicas, pues su pensamiento era demasiado concreto y tenía problemas de memoria, pues no recordaba con tanto detalle algunas cosas.

Su juicio de realidad estaba conservado, no se percibió alguna situación de pensamiento alucinatorio, percepciones alucinatorias ni otros rasgos sicopatológicos; solo tenía problema de comprensión de los hechos que se le imputan, sino de su historia de vida.

En cuanto a los resultados, el test de Wais, estandarizado para aplicación en población adulta, y regularizado en Chile por la Universidad Católica, arroja que el acusado tiene un retardo mental moderado, puntuando 49 puntos en la escala de este test, lo que implica que todas sus capacidades cognitivas están disminuidas o bajas, la de análisis, de juicio crítico y comprensión, bajas; memoria también significativamente baja.

Por ende, las capacidades que permiten comprender las situaciones de la vida, desde lo más básico a lo más complejo están bajas. En la escala verbal y manual, las capacidades son parejas, y en ambas, los puntajes son bajos.

No tiene un cuadro clínico, pues no cumple con criterios para diagnosticar trastornos de personalidad antisocial ni sicopatía, lo que no significa que no tenga características o elementos antisociales. La explicación que el perito tiene de esas características, es que se debe a que los retardos mentales, en general, van asociados a conductas de inadaptación social y conductas antisociales; por lo que la explicación, desde

su *expertise*, tiene que ver con la privación social, por un lado, y con el retraso mental.

Otro de los resultados importantes es que tiene historia de larga data de consumo de alcohol, desde los 12 o 13 años, la que, al ser crónica y ser dependiente del alcohol, ha derivado en daño a nivel orgánico, reflejado en el test, a través de la memoria, teniendo presente que el etanol genera cambios bioquímicos a nivel cerebral, como el neurotransmisor gamma, que actúa sobre el habla.

Ese daño está afectando la conducta del acusado. Además, tiene antecedentes familiares o de modelaje de esta conducta, a través del alcoholismo de su padre lo que en los nuevos estudios se llama herencia ambiental.

Mirado desde el punto de vista social, se pesquisa daño emocional determinado por el abandono de la figura materna, siendo probable que la madre también haya tenido algún retraso mental por la privación social que presenta. Hay situaciones de desapego, deserción escolar y vida de violencia ejercida por el padre.

Lleva más de cincuenta años de vida de calle.

En el informe, sugiere tener apoyo de alguna organización para superar el daño biosicosocial. Lleva abstinencia de más de un año, por lo que es posible la atención médica.

No se pesquisa red familiar, pero ha trabajado con alguna ONG, que podría hacerlo beneficiario de alguna pena sustitutiva.

Interrogado por la defensa, señala que es especialista en drogodependencia y sicopatía. Especializado en área forense, tiene once postítulos en esa área. Cuenta con especialización en drogodependencia en la Universidad Católica y de Concepción.

Realiza peritajes desde el inicio de la reforma procesal penal en Concepción, calcula haber realizado unos 130 peritajes para la defensoría.

La primera visita comprende una primera entrevista semi estructurada, de unas tres horas, que busca recopilar mucha información y, luego, se aplica instrumentos sicométricos, que es lo que más tiempo toma desarrollar. En el caso del Wais fue más corto, pues hay un protocolo muy pobre, debido al cuadro que presenta de

retardo mental. Por ejemplo, no supo responder quién era Gabriela Mistral, dando a muchas preguntas la respuesta 'no sé', o simplemente no contesta.

En cuanto a temas educacionales, en base a lo informado por el entrevistado, habría llegado hasta segundo básico y aun así no sabía leer ni escribir, no pudiendo leer los textos que se le presentaron.

Revisó la ficha clínica de los hospitales de Concepción y de Florida, y los exámenes del siquiatra Nelson Pérez, que dan cuenta de tuberculosis y consumo de alcohol de larga data, al igual que de la ONG que realiza seguimiento al acusado.

El periciado tiene un modo de ser introvertido, habla poco, no se expresa mucho y por momentos hay dificultad para que el evaluador pueda generar un diálogo. También le cuesta la comprensión, lo que lleva al perito a ser demasiado concreto para desarrollar un concepto, para que pudiera ser comprendido por el entrevistado.

Lo ve tranquilo, accesible, reconociendo en todo momento los hechos por los que estaba privado de libertad y que nunca se arrancó, dispuesto a cooperar, pero emocionalmente muy afectado.

En relación al deterioro orgánico, implica que no se le puede dar más de dos o tres instrucciones, muy concretas, casi no tiene capacidad de abstracción, le cuesta entender conceptos. Su capacidad de enjuiciar cosas, hacer análisis normales para otras personas, en él está significativamente disminuido.

Con el consumo de alcohol, se pierde control de impulsos.

Es posible atención médica con tratamiento especializado, y se sugiere intervención de especialistas, como siquiatra y acompañamiento de alguna institución, asociado a periodo de abstinencia; lo que permitiría que el daño ya provocado no siga creciendo; además, de un proceso sicoeducativo.

Sobre la existencia del daño, la mayor fuente de información la aporta la ficha aportada por la ONG Catim.

Interrogado por el Ministerio Público, indica que no se aprecia alteración de conciencia, ni pérdida de

juicio de realidad, ni alteración temporal, ni que presente ideas delirantes, ni tiene criterios para cuadro clínico de sicopatía ni trastorno de personalidad antisocial.

La conclusión es de retardo mental moderado, que por exclusión no es ni grave ni profundo.

Respecto del relato del hecho, el acusado dijo que había una persona que era de calle, que lo acompañaba, que constantemente lo molestaba y hostigaba, y ese día le había advertido que alguna vez lo iba a pillar mal y lo iba a golpear. Ese día, entre otras cosas, le dio vuelta el carro con sus cosas, y entonces saca el cuchillo y le da una puñalada.

No hay referencias a haber consumido una determinada cantidad de alcohol en el párrafo relativo a esa narración. En términos generales se refería a haber consumido alcohol, pero no cuánto. Se realiza ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, para refrescar memoria, señalando el perito que el acusado no señaló cuánto alcohol había consumido el día de los hechos.

Consultado por el tribunal para aclarar su respuesta, indica que el resultado en el test de Wais, de 49 puntos, que llevan a concluir que tiene retardo mental moderado, es en una escala de 130 puntos como máximo, que tendría una persona brillante.

Nuevamente interrogado por el fiscal, a propósito de la respuesta dada al tribunal, indica que el retardo mental moderado va de los 30 a los 49 puntos, y que, desde los 50 puntos, sería un retardo mental leve.

2. **NELSON IGOR PÉREZ TERÁN**, médico siquiatra.

Evalúo siquiátricamente al acusado, a petición de la defensa.

Revisa la carpeta de investigación y realiza entrevista por videollamada, el 5 de diciembre de 2020, cuando el periciado estaba en el CCP El Manzano.

Se trata de una persona de 63 años, estaba en situación de calle previo a los eventos, dice ganarse la vida como vendedor ambulante.

Dice haber llegado hasta cuarto básico y repetido muchas veces. Dice haber tenido una vida dura y haber sido maltratado en la casa.

Señala haber empezado a trabajar como a los 13 años, recolectando cartones y chatarra, para reciclaje; también en el puerto, donde le pagaban con pescado. Nunca tuvo trabajo formal, con contrato. También algunos trabajos informales menores que denomina 'pololitos'.

Dice que dormía en la calle, cajeros automáticos o mamparas de alguna tienda, autorizado por guardias. Se dedicaba a pedir dinero en la calle y su día empezaba pidiendo comida para desayunar.

Se juntaba con otras personas en situación de calle y conseguían comida. Se acostaba tipo 9 o 10 de la noche, y no había tenido problemas de violencia en la calle.

Dice ser el mayor de dos hermanos, que su madre se fue de la casa, y que poco después llega una pareja de su padre, con quien tuvo problemas de maltrato.

Señaló haberse ido de la casa alrededor de los 13 años y empezar a trabajar. Pierde contacto con su hermana alrededor de los 22 años. Dice que sus padres están fallecidos. Sobre el padre, dice que murió al beberse una botella de ron.

Sobre vida de pareja, no da mayores detalles, ni de haber tenido hijos.

La institución Catim informa de una tuberculosis que lo tuvo hospitalizado en 2018, y que también sufrió de desnutrición severa. El siquiatra que lo atiende en ese momento, habla de daño cerebral y trastorno adaptativo.

Refiere consumo de alcohol desde los 13 años, pero no drogas. Dice tomar medio litro de 'vinito' en la mañana y un litro y medio en la tarde. En total de cinco a siete litros en un día. Cuando dejaba de consumir, dice que se enfermaba.

Sobre antecedentes penales, dice haber tenido problemas con una persona que le robaba alcohol y que murió, por lo que lo pusieron en la cárcel. Sus antecedentes penales presentan condenas por hurto o porte de arma blanca.

Tiene problemas para resolver operaciones matemáticas básicas. Prácticamente no sabe leer.

Casi no sabe tomar locomoción y no maneja telefonía, mensajería, ni redes sociales.

Sobre el motivo de estar privado de libertad, dice que tuvo problemas con un hombre, que llega a molestarlo, que lo conocía por ser persona de la calle. Dice que lo iba a molestar seguido, decía que él era el que mandaba y que, si quería, le pegaba; que ese día no fue distinto, por lo que saca un cuchillo que usaba para abrir latas, le pone un 'puntazo', el hombre cae de rodillas, se queda en el lugar hasta que llega Carabineros y bomberos, pues había cometido un error.

A nivel de pericias previas, en una pericia psicológica se le aplica test de Wais, dando un puntaje de 49.

En el examen sicopatológico, destacaba autocuidado muy deficiente al momento de la entrevista, aparenta edad mayor a la cronológica, tabique nasal desplazado, lenguaje simple y concreto, repite recurrentemente frases, en forma descontextualizada, le cuesta resolver las preguntas que se le formulan, lo que es propio de los daños cognitivos.

Intelectualmente, impresiona con un grado de limitación, de rango leve, no se observan alucinaciones ni evidencia ideas delirantes, por lo que había juicio de realidad conservado.

Desde el punto de vista clínico, tiene dependencia severa del alcohol, con antecedentes que son compatibles con delirios, tiene daño orgánico cerebral compatible con una demencia, probablemente relacionado con alcohol, aunque para establecer con certeza la causa de la demencia, sería necesario realizar otras pruebas.

Desde el punto de vista intelectual, tiene un retardo mental leve, pese a que el informe psicológico puntúa 49, que equivale a retardo mental moderado. Cuando el nivel educacional es bajo, el puntaje tiende a ser más bajo, lo que lo hace compatible con lo observado por el perito, en el sentido de que, en el test, en estas condiciones de baja escolaridad, se puede perder unos 5 o 6 puntos, por lo que su conclusión es que el retardo mental es leve y no moderado.

En relación a los hechos, el periciado refiere que habría estado bajo los efectos del alcohol, por haber consumido unos dos litros ese día, pero no hay más información sobre ese punto.

Concluye que hay elementos que permiten establecer que el acusado tiene capacidad mental, al menos, parcialmente alterada.

Interrogado por la defensa, indica que es médico de la Universidad de la Frontera titulado en 1998 y siquiatria de la Universidad de Concepción el 2001. Tiene magister en sicoterapia analítica de la Universidad del Desarrollo de 2005; master en política y servicio de salud mental en la Universidad Nueva Lisboa de Portugal, diplomado en siquiatria forense en la Universidad del Desarrollo.

Trabaja en el Hospital Guillermo Grant Benavente, donde es jefe de servicio de siquiatria hace unos cuatro años, trabajó en el penal El Manzano y hace pericias para la defensoría desde el año 2006 aproximadamente, y también para el Ministerio Público, hace unos 5 años.

Al realizar el peritaje, tuvo a la vista la carpeta de investigación y los antecedentes del Hospital de Florida, donde había un informe de un siquiatria, doctor Roa, que refiere deterioro cognitivo orgánico cerebral y trastorno adaptativo, de 2018.

Explica que todas las personas tienen un potencial intelectual, que se desarrolla hasta la adolescencia. Luego, se suma la posibilidad de sufrir daños, por enfermedades o consumo de sustancias. La inteligencia se deteriora por esos eventos nocivos. En el caso del periciado, todo hace pensar que es el alcohol lo que afectó sus capacidades, él habla de unos 5 a 7 litros diarios, prolongado en el tiempo.

Frecuentemente, en las demencias, hay síntomas como las repeticiones de frases o palabras, dentro o fuera de contexto, o las repeticiones de series; cuestiones que se presentaron en el caso del periciado. No se aprecia niveles de abstracción en el acusado.

Estima que es probable que el deterioro se pueda deber al alcohol. No se puede descartar una sífilis terciaria, que suele darse en personas en situación de calle, pero, para determinarla, se necesitan más exámenes, pero en su opinión, lo más probable es que el alcohol sea la causa del deterioro cognitivo del acusado.

Para explicar la diferencia de conclusiones con el examen sicológico, en cuanto al nivel de retardo del

periciado, indica que los test deben ser interpretados, conforme a lo que cada perito observa, y en este caso, el nivel cultural del periciado influye en la apreciación de los resultados, restando puntos en la escala de Wais, que fue la aplicada al acusado.

En este caso, estima que debe prevalecer la apreciación de la funcionalidad, sirviendo el test como un apoyo. El acusado dio 49 puntos, justo en la frontera entre el retardo mental moderado y el leve. Pero las características del acusado son propias de un retardo leve.

Distingue el deterioro cognitivo de la demencia. Describe las características del Alzheimer, como tipo de demencia más común. En el caso de la demencia por el alcohol, sus consecuencias se mantienen por mucho tiempo ocultas, salvo que se presente una insuficiencia hepática, que dispara las consecuencias funcionales de la demencia.

Cuando existe deterioro cognitivo, no hay mucho que hacer para su recuperación, lo que se puede hacer es tratar de que no se siga profundizando.

En el caso del acusado, lo primero en su tratamiento tendría que ser detener el consumo de alcohol, y se puede buscar apoyo de residencias y de siquiatra, pero para controlar el tema de la impulsividad, principalmente.

Interrogado por el fiscal, indica que, cuando se habló de demencia, lo refiere a que el nivel intelectual se va deteriorando por un efecto que va generando nocividad en el nivel intelectual.

La situación de deterioro cognitivo podría tener como causa el consumo de alcohol o una sífilis terciaria, y en el caso del acusado, la causa es desconocida, pues faltan los exámenes para descartar la sífilis terciaria.

La conclusión del informe es que no se puede determinar la causa de la demencia, pues la hipótesis diagnóstica es que probablemente sea el consumo de alcohol, pero para descartar otras causas, se requiere otros exámenes, especialmente los test para sífilis.

Aplicados los tests al acusado, al momento de su aplicación, no se encontró que el acusado tenga

alteraciones sensorio-perceptivas, ni ideas delirantes, ni se evidencian en el pasado.

Su estado de ánimo era eutímico, que descarta la euforia y depresión. El juicio de realidad estaba conservado, al momento de la entrevista.

No le pareció que, al momento de los hechos, el acusado no presentaba un cuadro sicótico, en base al relato que él hizo de ellos.

Su conclusión es que tenía dificultades para procesar datos y responder preguntas, comprender contextualización y controlar impulsos.

En relación al deterioro cognitivo, la conclusión es retardo mental leve, a diferencia que el psicólogo, que señala que su retardo mental es moderado. Explica que las pruebas no dan diagnóstico, pues tienen sesgos, por lo que hay que interpretarlos, llegando a la conclusión, en base a lo observado, es que su retardo es leve.

Las formas de evaluar el intelecto, son en base a lenguaje, autonomía, nivel de abstracción, entre otros.

Se constata que tiene ciertos grados de autonomía, que le permiten valerse en la vida diaria, si su retardo mental fuera moderado, necesitaría de cierto nivel de tutoría, en que alguna persona se preocupe de supervisar su vida cotidiana.

3. **STEPHANIE PATRICIA RODRÍGUEZ FABAR**, trabajadora social.

Realizó informe social, a petición de la defensa, para establecer aspectos sociales, laborales y familiares del acusado, para revisar medida cautelar.

En cuanto a la metodología, indica que hizo una entrevista semi estructurada del acusado, en dependencias destinadas para ello por Gendarmería, el 15 de diciembre de 2020, con duración de unas dos horas, que es un tiempo mayor a lo habitual, dadas las condiciones del imputado, analfabetismo y prolongada exposición al sistema de calle.

Se hacen averiguaciones relativas a su crianza, en familia disfuncional, por negligencia de la madre y maltrato y fallecimiento del padre; lo que lo lleva a iniciar tempranamente una vida de vagancia, que lleva unos 50 años, que generó un deterioro sicosocial significativo, perjudicando sus dinámicas de interacción

con el medio, perjudicando sus posibilidades de empleo formal, a partir de su analfabetismo.

Ha vendido productos en la calle y cuidado autos. Al principio, trabajaba en caletas en Talcahuano. Ese contexto lo introduce al consumo de alcohol, patrón que mantiene hasta la fecha.

Como se produjo fragmentación del espacio familiar, las relaciones han sido con instituciones de la sociedad civil, como la fundación Catim y programas Calle del Hogar de Cristo, contrastando la información con los profesionales de esas entidades, ratificando la participación del acusado en sus programas, por lo que los agentes de socialización con los que se ha relacionado el acusado es ese tipo de instituciones, y no con familiares.

Se accedió a fichas clínicas, que demuestran deterioro significativo en el aspecto sicosocial, teniendo solo episodios aversivos y violentos durante el desarrollo vital.

Interrogado por la defensa, dice que su profesión es de asistente social, mayoritariamente con estudios ligados con el sistema penitenciario, habilitada como perito para Ñuble y Biobío, ha emitido unos 85 peritajes. Actualmente es coordinadora del programa de capacitación y empleo del CCP Biobío.

Para su informe, realizó una sola visita, el resto fueron coordinaciones para establecimiento de redes, con las instituciones ya referidas, coincidiendo la información obtenida con la historia vital del acusado, siendo evidente la intervención realizada, en situaciones puntuales de la vida del acusado.

Tuvo a la vista la ficha clínica del hospital de Florida, por una tuberculosis que padeció el acusado, junto con un informe psiquiátrico del doctor Roa.

Respecto de las posibilidades de reinserción, con tratamiento estructurado, es posible que se pueda reinserter, a través de las instituciones con las que se ha relacionado el acusado, con acompañamiento multidisciplinario, con intervención focalizada y un plan de trabajo, para determinar sus necesidades y posterior monitoreo.

Fue complejo establecer diálogo estructurado con el acusado, pues situaciones y respuestas normales para el

común de las personas, se le hicieron difíciles. Cuando se le pregunta sobre la felicidad, no pudo responder, y se exhibe el deterioro sicosocial, estando excluido de relaciones sociales comunes, como la familia, sistema escolar o laboral.

Interrogada por el Ministerio Público, señaló que el acusado no tendría redes de apoyo familiar, pudiendo establecerse apoyo de instituciones de sociedad civil y red pública. No se establece existencia de familia ni pareja que se puedan vincular con él.

No se encontró información relativa a su escolaridad en la plataforma del Ministerio de Educación. Presenta analfabetismo por desuso. No ha tenido empleo formal, no existiendo información a su respecto en el sistema de AFP, solo ha tenido ocupaciones menores, en ámbito informal.

Dice que tendría posibilidades de insertarse a través de alguna institución que le provea de sus necesidades, a través de un plan de trabajo, que le permita reininsertarse social y laboralmente.

Sin apoyo familiar, analfabeto y sin haber tenido empleos formales ni profesión u oficio, adicto al alcohol, no necesariamente caerá nuevamente en situación de calle, en la medida que se pueda establecer coordinaciones en la reinserción, al menos en los primeros pasos del proceso.

Una persona en sus condiciones, podría insertarse socialmente, al alero de un plan de trabajo integral, que generalmente duran 24 a 36 meses, teniendo monitoreo más abierto en el tiempo posterior.

II. Documental:

1. Certificado médico de fecha 14 de junio de 2019, suscrito por cirujano Rodrigo Neira Nuñez, Hospital de Florida, que da cuenta de diagnóstico médico del imputado Juan Fernández Ruyer.

Indica que paciente estuvo hospitalizado por tuberculosis.

2. Certificado médico de fecha 14 de octubre de 2019, suscrito por siquiatra Felipe Roa Adams; hospital de Florida, que da cuenta de diagnóstico médico del imputado Juan Fernández Ruyer.

Se indica diagnóstico de deterioro orgánico cerebral y trastorno adaptativo ansioso.

3. Epicrisis de 26 de marzo de 2019, hospital de Florida respecto de la hospitalización del imputado Juan Fernández Ruyer.

En su ficha clínica, indica haber estado hospitalizado desde el 6 de febrero de 2019 al 6 de noviembre del mismo año; paciente en situación de calle y dependencia al alcohol.

Trastorno orgánico cerebral, derivado de consumo de alcohol.

4. Informe de atención policlínico, broncopulmonar adulto, hospital Regional Guillermo Grant Benavente, por interconsulta desde el hospital de Florida de 21 de junio de 2019.

Refiere diagnóstico de tuberculosis pulmonar resistente, situación de calle, deterioro cerebral orgánico, desnutrición y consumo problemático de alcohol.

5. Informe de atención paciente hospitalizado, Hospital de Florida de fecha 26 de julio de 2019.

Refiere diagnóstico de TBC resistente y deterioro orgánico cerebral.

6. Informe de atención paciente hospitalizado, Hospital de Florida de 30 de julio de 2019.

Trastorno TBC resistente, trastorno orgánico cerebral.

7. Informe de atención paciente hospitalizado, hospital de Florida de 16 de septiembre de 2019.

Refiere TBC resistente, trastorno orgánico cerebral, desnutrición.

8. Informe de contrarreferencia, broncopulmonar adulto, hospital Regional Guillermo Grant Benavente, de 9 de septiembre de 2019.

Refiere evaluación social para ser enviado a hogar de acogida.

Tuberculosis pulmonar resistente, daño cerebral y consumo de alcohol.

NOVENO. Que, en su alegato de clausura, el representante del Ministerio Público, ha indicado que se ha indicado las atenuantes del acusado, la prueba de cargo y declaración del acusado, permiten establecer el hecho y participación.

El acusado vive en situación de calle, no mantiene profesión ni oficio, se dedica a pedir limosna en la calle.

Su situación de vida es lamentable, pero la víctima estaba en idéntica situación, se dedicaba a vender parches en la calle.

Puede existir una cierta victimización del acusado, parte de la teoría del caso de la defensa, pero es igual para la víctima.

Los hechos están demostrados por la declaración de los testigos del Ministerio Público, que estaban en las inmediaciones del sitio del suceso, calle Barros Arana con Serrano. Dos trabajan en una especie de establecimiento educacional, otro en un edificio, otra en un hotel y un pasajero del hotel.

Lo que vieron los testigos, en distintos momentos, es una discusión entre dos personas, uno es el acusado, que la mayoría ubica de antes, porque ahí tenía sus pertenencias, descrito como persona andrajosa, más alto que el promedio, de barba y canoso, incluso una de las testigos dijo que diariamente la iba a saludar.

Lo reconocieron en la fotografía tomada por personal policial, que mostraba su aspecto el día de los hechos, con su vestimenta, barba y canas, plasmadas en la fotografía. El acusado reconoce la misma fotografía como la del aspecto que tenía el día de los hechos. Igual ocurrió con funcionarios aprehensores. Uno de ellos dijo que lo veía habitualmente en ese lugar, por sus rondas preventivas.

Una de las peritos incurre en un error en la calle que indica en su informe, pues el cuerpo estaba en Barros Arana y no en Aníbal Pinto, pero no es esencial en cuanto al contenido de su declaración.

Si bien los testigos hablaron de la discusión, tres de ellos también refieren que el acusado tenía en una de sus manos un elemento metálico, antes de la ocurrencia de los hechos, uno de ellos se refiere a que es un cuchillo. El acusado admitió que una de las fotos

corresponde al cuchillo que tenía y que luego lo dejó en el carro en que mantenía sus cosas.

Los funcionarios policiales dijeron que el cuchillo fue levantado con cadena de custodia, también reconocido por la funcionaria de Labocar. Es el mismo cuchillo fotografiado e incorporado como prueba material, no habiendo duda de que es el arma homicida.

Puede haber discordancia en si tenía dientes, pero el resto de las características son las mismas, no cambiando la conclusión, diciendo el médico legista que la herida tiene bordes lisos, compatible con un arma con hoja lisa.

La disputa entre acusado y víctima tiene origen no determinado, pero los testigos refieren una discusión relativa a alguna conducta sexualizada. Luego, el acusado dijo estar cansado de estas acusaciones, usando este utensilio, le da una puñalada en la región torácica superior, generando esta herida, afectando pulmón, ventrículo izquierdo y la arteria aorta, produciendo la muerte por paro cardiorrespiratorio, siendo inevitable la muerte.

Herida provocada dolosamente, con dolo directo o al menos eventual, por la zona en que se produjo, aceptando que se iba a producir este resultado.

La conducta configura el delito de homicidio simple, estando acreditada la participación por la declaración de los testigos, ratificada por lo dicho por el acusado al funcionario aprehensor, en forma espontánea, sin vulneración de derecho alguno, procediéndose a la detención.

El Ministerio Público reconoce el valor de la declaración como colaboración sustancial, antes de existir alguna diligencia de investigación; y la atenuante del artículo 11 n°8, pues pudiendo fugarse, indica a un funcionario policial, que es el autor del ilícito, quedándose en el mismo lugar.

Se incorpora certificado de defunción, se acredita el lugar del ilícito.

Ratificada la teoría del Ministerio Público, pide veredicto condenatorio.

DÉCIMO. Que, por su parte, la defensa indicó, en su alegato de clausura, que, al inicio del juicio, se

relataron hechos de la vida del acusado, que han sido acreditados por la prueba incorporada.

Declararon testigos sobre los hechos ocurridos en octubre de 2020, donde pernocta el acusado. El Ministerio Público es el encargado de acreditar el hecho y participación.

La defensa ha incorporado prueba para demostrar la capacidad mental distinta del acusado. Él prestó una confesión, aun antes de ser detenido.

Si se hace una abstracción, sacando la declaración del acusado, hay prueba bastante insuficiente para demostrar la participación del acusado, pues los cinco testigos civiles que depusieron en el juicio no presenciaron la agresión que se atribuye al imputado.

El pasajero del hotel contiguo al lugar de los hechos, señala un elemento distinto al periciado posteriormente. Ello cobra relevancia en relación a la declaración del acusado, pues se da cuenta de estar cansado del maltrato que le daba la víctima.

Funcionarios policiales se refieren a lo que el acusado le dijo, no se empadronó testigos por éste, el arma fue incautada por un funcionario distinto, que no compareció al juicio.

La prueba es insuficiente, está complementada por la declaración del acusado, que se entrega voluntariamente, participa de las diligencias que le fueron solicitadas, se somete a peritajes, entrega sus pertenencias. Entiende que la colaboración ha sido sustancial.

Lo aportado por el acusado lleva a evaluar su capacidad intelectual. En ese sentido, declararon los peritos, tendientes a demostrar una imputabilidad disminuida, que es la petición que se va a plantear, estableciendo su capacidad mental distinta.

El perito sicólogo ha hablado del deterioro orgánico, que en su informe de la escala Wais obtuvo 49 puntos, propios de un retardo mental moderado, que se afecta la capacidad de comprensión del acusado, respecto de lo justo e injusto y capacidad de autodeterminarse, se refirió al alcoholismo, situación de calle y falta de apoyo familiar.

El perito siquiatra se refirió a la demencia del acusado secundaria al alcoholismo, estableciendo la capacidad mental disminuida.

Como la sanción no puede superar la imputabilidad, la defensa pide se reconozca la atenuante del artículo 11 n°1, aplicando el artículo 73 del Código Penal.

Para la defensa, se ha hecho compleja la situación, pues el acusado no fue capaz de contestar preguntas en Juzgado de Garantía, para terminar la causa de otra forma.

Pide en consecuencia que se reconozca la minorante, demostrada no solo con la declaración de los profesionales en el juicio, sino también con la documental, que da cuenta de deterioro orgánico, situación de calle y dependencia del alcohol, previa a la ocurrencia de los hechos.

Pedirá también se reconozca las atenuantes señaladas por el Ministerio Público en la acusación.

UNDÉCIMO. Que únicamente el representante del Ministerio Público hizo uso de su derecho a réplica, indicando, sobre el artículo 11 n°1 en relación al art. 10 n°1, que no se opone a su aplicación, pero hace una prevención, relativa a que lo que se encuentra acreditado es un retardo mental leve.

Lo que dijo el siquiatra, que es el profesional que tiene la última palabra, es que no tiene cuadro sicótico ni delirante, y que todo lo que lo afecta en su capacidad de conducta y adecuación, es deterioro cognitivo que se presenta a través de los años, hipotéticamente derivado del consumo de alcohol.

Pero lo relevante es que tiene retardo mental leve, que, si bien tiene 49 puntos en la escala de Wais, ya que no solo se debe atender a la puntuación, sino a la funcionalidad, que le da a entender que estaba en situación de retardo mental leve. En colisión en la opinión de dos profesionales, debe prevalecer la del siquiatra por sobre la del sicólogo.

DUODÉCIMO. Que, consultado el acusado si deseaba agregar algunas palabras finales a lo ya dicho, indicó que mantendría silencio.

DÉCIMO TERCERO. Hechos acreditados. Que, ponderando con libertad los elementos de prueba producidos en el

juicio, este Tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda razonable, que se encuentran acreditados los siguientes hechos:

“El 27 de octubre de 2020 a las 17.00 horas aproximadamente, en la vía pública calle Barros Arana esquina con calle Serrano de la ciudad y comuna de Concepción, el acusado Juan Antonio Fernández Ruyer, luego de una discusión con el ofendido, actuando con ánimo homicida y portando un arma blanca del tipo cuchillo apuñaló a la víctima Juan Alejandro Garcés Sáez en el tórax ocasionándole la muerte por herida penetrante torácica que afectó órganos vitales. Las lesiones fueron recientes, vitales y necesariamente mortales”.

DÉCIMO CUARTO. Que, en cuanto al lugar y día de los hechos, se cuenta con la declaración de los testigos civiles presentados por el Ministerio Público, que coinciden en que los hechos ocurrieron el día 27 de octubre de 2020, alrededor de las 17 horas, en la intersección de las calles Barros Arana y Serrano, en el centro de Concepción, explicando todos ellos que se encontraban en el lugar por razones laborales, a excepción del testigo Ramos Cid, quien se encontraba alojando en el Hotel Concepción, que se ubica en la referida intersección.

Los dichos de los referidos testigos se ven ratificados por los de los funcionarios Pincheira Quiroga y Salgado González, quienes indicaron que fue en esa fecha y lugar donde se constituyeron, realizando el primero sus labores de investigación y practicando, el segundo, la detención del acusado.

Lo anterior no se ve modificado por la declaración de la perito Guzmán Mardones que, si bien indica haber realizado sus diligencias una calle distinta, como es Aníbal Pinto, se debe tomar ello como un mero error de referencia, pues el resto de su declaración coincide plenamente con la narración dada por los restantes testimonios.

DÉCIMO QUINTO. Que, para dar por acreditada la existencia del delito, se cuenta, en primer término, con los testimonios de los civiles que presenciaron una discusión entre acusado y víctima.

Así, el testigo Gastón Ramos, pasajero, a la fecha de los hechos, del hotel Concepción, indicó que camino a

una farmacia, vio que dos personas en aparente situación de calle, discutían a viva voz en la intersección de las calles Barros Arana y Serrano, de esta ciudad y, al volver, ve que una de ellas estaba tirada sangrando en el suelo, y, la otra, a unos pasos de distancia, guardando un cuchillo entre sus ropas. El supuesto agresor, además, se le acerca, le dice unas palabras relativas a haber estado 'cansado' o 'cabreado' de la otra persona y le pide un cigarrillo.

La discusión fue presenciada además por Yaslim Lara, Catalina Díaz, Cecilia Silva y Jorge Díaz, todos quienes refirieron haber estado trabajando en diversos establecimientos situados en la misma intersección, conocer de la disputa entre ambos involucrados y luego haber tomado conocimiento de la herida padecida por la víctima, dada la llegada del contingente policial y de salud al lugar.

Se cuenta, asimismo, con la declaración de los funcionarios policiales Salgado González y Pincheira Quiroga. El primero de ellos fue el encargado de constituirse en el lugar de los hechos, una vez recibido el llamado de cencho, constatando la presencia de una persona herida en la vía pública, que sangraba profusamente y que estaba recibiendo los primeros auxilios.

El funcionario Pincheira Quiroga, por su parte, se constituyó momentos después, comisionado por el fiscal de turno para realizar las primeras diligencias investigativas, verificando las mismas circunstancias y obteniendo la declaración de algunos testigos del hecho.

Si bien, ninguno de estos testigos vio el momento exacto de la agresión con arma cortopunzante, todos ellos tomaron conocimiento, por diversas vías, de la pelea entre dos personas, que derivó en la agresión sufrida por quien resultaría luego fallecido.

DÉCIMO SEXTO. Que, en cuanto a la herida provocada a la víctima, se cuenta con la declaración de la perito Madelyn Guzmán, quien, en su informe criminalístico, dio cuenta de haber periciado la ropa de la víctima, consistente en dos poleras sobrepuestas, que tenían daños en la zona del pecho, compatibles con arma cortopunzante que también fue incautada y con las heridas en la zona torácica que presentaba el occiso.

Lo anterior, se ve corroborado con la declaración del perito Zuchel Matamala, quien, al realizar la autopsia al cadáver de la víctima, logró establecer que el deceso se produjo por una herida cortopenetrante, en el tercer espacio intercostal, al costado de la tetilla, que perfora el lóbulo superior del pulmón derecho, corazón y arteria aorta, produciendo la muerte en un muy corto lapso.

Lo dicho es concordante con la declaración del acusado, quien indicó que, luego de haber tenido una discusión con la víctima, saca un cuchillo y le da un puntazo, sin tener claridad de la zona afectada.

DÉCIMO SÉPTIMO. Que, en cuanto al carácter mortal de la lesión provocada al occiso, se cuenta con la prueba pericial del médico legista, que da cuenta de la profundidad de la herida, superior a los diez centímetros, perforando órganos vitales, como el pulmón, el corazón y la arteria aorta, generando una rápida pérdida de sangre, de tres a cinco centímetros cúbicos por cada latido, llegando la víctima a perder unos dos litros de sangre en total; lo que generó una gran debilidad en piernas y brazos.

Añade el perito que, la lesión de la arteria aorta, a la altura del callao, provoca que no llegue sangre a los tejidos, lo que, unido a la perforación del pulmón, hacen que el paciente sufra un paro cardiorrespiratorio.

La conclusión, entonces, es que la herida es necesariamente mortal, según los dichos del médico legista, lo que concuerda con la conclusión de la perito criminalista, a la que llega por la ubicación de la herida y lo infructuoso de las maniobras de reanimación realizadas por personal médico, apenas unos minutos después de haberse generado la lesión en la víctima.

Se suma a lo anterior, la declaración de los testigos civiles, especialmente de Ramos Cid, que ven a una persona tendida en el suelo, atendida por personal médico, que intenta reanimarla, sin éxito, ratifica el pronto deceso de la víctima, llevando ineludiblemente a la conclusión de que la herida era necesariamente mortal.

Finalmente, el certificado de defunción de Juan Garcés Sáez, que indica que su deceso se produjo por herida torácica penetrante.

DÉCIMO OCTAVO. Que, en lo relativo al elemento con el que se produjo la herida a la víctima, ya el acusado señaló haber tomado un cuchillo, luego de su discusión, para darle un puntazo a quien sentía que lo estaba hostigando, lo que se ve ratificado con lo dicho por el testigo Ramos Cid, que es el primero en ver a la víctima en el suelo, luego de la agresión, señalando que vio al acusado guardando un cuchillo entre sus ropas, pero que el filo había generado un orificio, por el que pasa el cuchillo, siendo perceptible a simple vista.

Ello concuerda con lo dicho por la testigo Lara Soto, que indicó haber visto un objeto en la mano, que parecía de aluminio, en similares términos a lo expresado por la testigo Díaz Muñoz.

El testigo Salgado González indicó que, al practicar la detención, su compañero, el cabo Robles, levanta un cuchillo, que fue fijado fotográficamente.

La prueba pericial, a su vez, es la que elimina cualquier duda respecto del arma utilizada, pues, por una parte, la perito Guzmán Mardones incorpora en su informe el arma cortopunzante, consistente en un cuchillo de cocina, de hoja lisa y 11,5 centímetros de grosor y mango de madera, reconociéndolo cuando le fuera exhibido en la audiencia de juicio; y el perito médico legista ratifica que la herida que provocó la muerte de la víctima era de tipo cortopenetrante, con bordes netos, de unos diez centímetros de profundidad, lo que es compatible con el arma incautada y que, según se ha dicho, se reconoció por el acusado que fue la utilizada el día de los hechos.

DÉCIMO NOVENO. Que la participación del acusado en el hecho punible se ha acreditado, en primer término, con su propia declaración, prestada en la audiencia de juicio oral, reconociendo expresamente que, luego de una discusión con Juan Garcés Sáez, sostenida en la vía pública, extrajo de entre sus pertenencias un cuchillo que usaba para abrir latas y le propina lo que denomina un 'puntazo', sin tener certeza del lugar exacto en que se da el golpe, pero que deja a la víctima en el suelo, para fallecer unos momentos después.

Esta participación se ratifica con los dichos de los testigos civiles, que sostuvieron haber visto al acusado discutiendo acaloradamente con una persona en la calle, detallando el testigo Ramos Cid que, cuando vuelve de la

farmacia al hotel donde se alojaba, ve a la víctima tendida en el suelo y, a unos pasos de él, al acusado, que dijo que lo tenía 'cabreado' y que le pide un cigarrillo.

Además, el funcionario policial Salgado González señaló haber encontrado al acusado en el lugar de los hechos, que lo conoce de antes, pues lo había visto cuando hacía sus patrullajes en el sector, que lo identifica como un indigente que pernoctaba en el lugar y que, al llegar, le pregunta qué hizo y que la víctima lo había estado molestando toda la tarde, que le dio rabia y le dio una puñalada.

VIGÉSIMO. Que los hechos que se ha dado por acreditados son constitutivos del tipo penal de homicidio simple del artículo 391 número 2 del Código Penal, por cuanto se ha ejecutado una conducta consistente en propinar una herida con arma cortopunzante en la zona torácica de la víctima, que generó heridas en órganos vitales de ella, como son el pulmón, corazón y arteria aorta, necesariamente mortales, según se ha dicho en los considerandos anteriores.

En cuanto al tipo subjetivo, la acción se ha ejecutado, al menos, con dolo eventual, pues, aunque el acusado ha dicho no saber dónde golpeó a la víctima, el uso del arma cortopunzante, a corta distancia, apuntada a la zona torácica, hace que el actor se represente, al menos, que podía herir algún órgano vital del acometido y, con ello, provocar su muerte, aceptando la posibilidad de la producción del resultado típico.

VIGÉSIMO PRIMERO. Que la participación del acusado en el hecho es la de autor ejecutor, en los términos del artículo 15 número 1 del Código Penal, al haber ejecutado directamente la conducta típica que produjo el resultado de muerte.

VIGÉSIMO SEGUNDO. Que, en la audiencia especial del artículo 343 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público incorporó el extracto de filiación y antecedentes del acusado, en que consta que tiene una condena a multa del año 2009, por porte de arma blanca, que se encuentra prescrita y otra condena de 20 de marzo de 2015, por delito de lesiones graves, a 230 días de presidio, que se dio por cumplida, por lo que también se encuentra prescrita.

Señaló que, tal como se indicara en la acusación, se reconoce atenuantes de 11 números 8 y 9 del Código Penal, por lo que, considerando la pena concreta señalada por la ley, concurriendo tres atenuantes y ninguna agravante, pide se imponga la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales y costas de la causa, además de la incorporación de huella genética al registro respectivo.

VIGÉSIMO TERCERO. Que, la defensa, en la oportunidad respectiva, solicitó se reconozca al sentenciado las atenuantes del artículo 11 números 1, 7 y 8.

En cuanto a la primera, en relación al artículo 10 número 1, en base a los argumentos dados en los alegatos de apertura y de clausura, ya referidos en detalle.

Respecto a las otras dos atenuantes, las funda en el hecho de haber sido ya reconocidas por el Ministerio Público al formular la acusación.

Pide se imponga la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado medio.

Para efectos de la discusión de forma de cumplimiento, pide se conceda pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva del artículo 15 bis de la ley 18.216. Fundamenta su petición en que, si bien el sentenciado tiene condenas previas, ellas están prescritas.

Indica que la pena aplicada está dentro del margen que exige la norma en cuestión. Además, según el artículo 1° de la ley 18.216, procede la pena sustitutiva, cuando se da la imputabilidad disminuida.

En relación a los requisitos subjetivos, invoca el informe de la perito Stephanie Rodríguez, incorporado en la audiencia de juicio oral, elaborado durante la privación de libertad, que concluye que el acusado se puede reinserter, si tiene programa que propenda a su desarrollo.

Agrega que un trabajador social ha realizado gestiones con instituciones que acojan a personas en situación de calle, como son la Corporación Sempiterno, con cupo para acoger a personas en situación de calle y la institución Roberto Paz, que es la que propone concretamente, administrada por fundación Catim.

Señala que uno de los fines es la reinserción y resocialización de las personas, para evitar contacto criminógeno, es que se cuenta con centros de reinserción social que cuentan con herramientas para tratamiento ambulatorio y delegados que los protegen en distintas situaciones.

VIGÉSIMO CUARTO. Que, concurre, respecto del sentenciado, la eximente incompleta del artículo 11 número 1 en relación con el artículo 10 número 1, ambos del Código Penal, esto es la imputabilidad disminuida, desde que con la prueba pericial aportada en el juicio es posible concluir que el inculcado sufre una patología mental que disminuye su imputabilidad, en el entendido que ésta consiste en la cabal capacidad de comprender lo justo o injusto de un acto y de autodeterminarse acorde a esa comprensión.

En efecto, siendo la plena imputabilidad la regla general, correspondió a la defensa la prueba de tal minorante, y a juicio del tribunal fue suficiente para su aplicación, y basta para concluir en tal sentido la declaración de los peritos que depusieron en juicio, quienes estuvieron contestes en que padece un retardo mental, una alteración orgánica cerebral y tiene un consumo problemático de alcohol que afecta su comportamiento.

Es así, como el perito psicólogo Salazar Sazo refirió que le hizo al acusado una entrevista psicológica y aplicó una serie de test, concluyendo que padece un retardo mental moderado, además consumo problemático de alcohol.

A su turno, el psiquiatra Pérez Terán, concluyó que el acusado presenta un retraso mental leve y consumo perjudicial de alcohol, que es lo que podría ser la causa del retardo, y que ambas circunstancias afectan su comportamiento.

Por lo tanto, en ese contexto, en relación al ilícito, presenta una disminución en su capacidad de entendimiento y una disminución en su capacidad de control voluntario de su conducta.

El daño orgánico cerebral y alcoholismo ya habían sido diagnosticados en el Hospital de Florida, a propósito de la tuberculosis que el sentenciado padeció en el año 2019, según consta de la ficha clínica incorporada como prueba documental.

Como se observa, con la prueba pericial y documental rendida, a juicio de estos sentenciadores, ha resultado acreditado suficientemente el deterioro cognitivo que lo afecta y que se evidencia cómo se relaciona con el entorno y cómo evalúa las consecuencias de su actuar, teniendo, al menos, un retardo mental leve que afecta al encartado y que disminuye su capacidad de comprensión y de anticiparse a las consecuencias de sus actos, lo que, en consecuencia, disminuye la capacidad de control de sus conductas.

La imputabilidad, como elemento de la culpabilidad puramente normativa, implica el reconocimiento del principio de igualdad que consiste precisamente en tratar de manera desigual a los desiguales, y en este caso, ese tratamiento al acusado ha de implicar el reconocimiento de una atenuante de responsabilidad penal, pues el juicio de reproche que el Derecho Penal dirige a las personas normales por hechos típicos y antijurídicos realizados en pleno conocimiento de su ilicitud y en ejercicio de su voluntad de realizarlos no obstante conocer su carácter injusto, no puede ser el mismo que aquel que ha de dirigirse a quien, por un déficit de comprensión, no está en capacidad real de asumir de manera libre y consciente, el riesgo de la sanción por el injusto cometido.

De esta manera, puede concluirse que por los antecedentes aportados por la prueba pericial y documental, el enjuiciado, sin ser 'loco o demente', tiene una alteración en sus facultades mentales que configura lo que se ha dado en llamar una 'imputabilidad disminuida' que, en tanto tal, es suficiente causa para la concurrencia de la atenuante del artículo 11 número 1 en relación al artículo 10 número 1, ambos del Código Penal.

Por otro lado esta patología que presenta el acusado no se le considerará con los efectos que prescribe el artículo 73 del Código Penal, como quiera que aun aceptando que este precepto pueda aplicársele a aquellas eximentes que no constan de requisitos literalmente diferenciados, resulta que por tratarse de una alteración mental a cuyo respecto no se ha probado que sea de entidad y gravedad cercana a un estado de privación total de la misma, se estimará como una atenuante corriente que ha de regirse en sus efectos por

las normas del artículo 62 y siguientes del mencionado texto legal.

VIGÉSIMO QUINTO. Que favorece al acusado la circunstancia atenuante del artículo 11 número 8, pues pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito.

Ello, pues consta de la declaración de los testigos Ramos Cid y Salgado González, que el acusado se mantuvo, luego de propinar la puñalada a la víctima, en el mismo lugar, en calma, esperando la llegada de Carabineros, confesando espontáneamente al funcionario policial, que él había cometido el delito.

VIGÉSIMO SEXTO. Que, además, concurre a favor del acusado la atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal, esto es, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, configurada a partir de su actitud luego de la detención, permitiendo la toma de muestras biológicas, la incautación del arma homicida, la entrega de parte de su ropa, para la realización de peritajes y, finalmente, con su declaración en la audiencia de juicio oral, que ha permitido eliminar cualquier duda respecto de su participación punible en el delito por el que ha sido juzgado.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Que el artículo 391 número 2 del Código Penal castiga el homicidio simple con la pena de presidio mayor en su grado medio.

Ahora bien, concurriendo tres circunstancias atenuantes y ninguna agravante, considerando su número y entidad, el tribunal acoge la petición de la defensa, en cuanto a rebajar la pena en dos grados, conforme autoriza el artículo 67 inciso cuarto del Código Penal, quedando en consecuencia la pena en el rango del presidio menor en su grado máximo.

Dentro del grado ya determinado, conforme al artículo 69 del Código Penal, el tribunal, considerando nuevamente las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal y que la extensión del mal causado es la inherente al delito de homicidio por el que se condena, sin que se haya hecho referencia a alguna otra circunstancia que aumente dicho mal, establece la pena en el mínimo dentro del grado, esto es, en tres años y un día.

VIGÉSIMO OCTAVO. Que, en cuanto a la forma de cumplimiento de la sentencia, la defensa ha solicitado la concesión de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva.

El artículo 1° de la ley 18.216 señala que solo se puede conceder alguna pena sustitutiva al condenado por delito del artículo 391 del Código Penal, cuando se le haya reconocido la circunstancia atenuante del artículo 11 número 1 del mismo código.

Por su parte, el artículo 15 bis letra b) de la ley 18.216; dispone que la libertad vigilada intensiva resulta procedente cuando la pena a imponer, en el caso del artículo 391; sea superior a los quinientos cuarenta y un días e inferior a los cinco años de privación de libertad, situación que se da en el caso de autos, por lo que es necesario constatar la concurrencia de los requisitos del artículo 15 de la citada ley.

El acusado cumple con la primera exigencia, relativa a las condenas previas, pues las penas que le fueran impuestas por simples delitos se encuentran cumplidas más de cinco años antes de la comisión del nuevo delito, siendo la última de 20 de marzo de 2015, dada por cumplida en la misma fecha, transcurriendo más de cinco años hasta la comisión del delito que motiva la presente causa, que es de 27 de octubre de 2020.

Ahora bien, la ley exige analizar los antecedentes sociales y características de personalidad del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, para concluir que una intervención individualizada parece eficaz en el caso específico, para su efectiva reinserción social.

En este punto, el tribunal estima que el acusado no cumple con lo necesario para la concesión de la pena sustitutiva en cuestión, pues se trata de una persona que ha estado ajena al sistema social durante toda su vida adulta, viviendo en la calle por alrededor de cincuenta años, con alto nivel de alcoholismo, al punto de haber generado un daño orgánico cerebral, según se ha expuesto en los considerandos anteriores, no ha tenido jamás un trabajo formal, no cuenta con educación alguna, de modo que la conducta anterior al hecho punible y sus características de personalidad del condenado no dan

garantías de que la intervención sea eficaz para su reinserción social.

Por otra parte, la naturaleza del delito de homicidio y las circunstancias en que fue cometido, donde a partir de una discusión con otra persona en situación de calle, motivó al acusado a propinar una puñalada mortal a su contendor, muestra un evidente descontrol de impulsos, que desaconseja el cumplimiento de la pena en libertad, más allá del eventual plan de intervención que se pudiera elaborar.

Finalmente, la argumentación y prueba presentada por la defensa para justificar su petición de pena sustitutiva, consistente en peritaje social, que intenta demostrar la posibilidad de insertar socialmente a una persona en las condiciones de Fernández Ruyer, no se refieren al caso concreto de éste, sino a una situación abstracta, donde, si se da una serie de condiciones, sería posible llegar a tener un resultado exitoso, mas el condenado no ha tenido, en cincuenta años, intenciones de insertarse en la sociedad, estando entregado a la mendicidad y no teniendo trabajo formal; de modo que las conclusiones de la perito asistente social presentada por la defensa no son más que una declaración abstracta que no se corresponde con la realidad del sentenciado.

En consecuencia, la pena impuesta deberá ser cumplida en forma efectiva por el hechor.

VIGÉSIMO NOVENO. Que Fernández Ruyer ha sido representado por la Defensoría Penal Pública y, no obstante haber sido condenado, sus peticiones relativas a circunstancias atenuantes han sido acogidas, de modo que existe motivo fundado para eximirlo del pago de las costas de la causa.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1°, 3°, 10 n°1, 11 n°1, 8 y 9; 14 n°1, 15 n°1, 21, 25, 29, 50, 67, 73 y 391 número 2 del Código Penal; artículos 47, 59, 108, 109, 295, 296, 297, 323, 326, 329, 338, 340, 341, 342, 344, 348, 351 y 468 del Código Procesal Penal; SE DECLARA:

I.- Que **SE CONDENA**, al acusado **JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ RUYER**, ya individualizado, en calidad de autor del delito consumado de homicidio simple, del artículo 391 número 2 del Código Penal, cometido en Concepción,

el 27 de octubre de 2020, en la persona de Juan Alejandro Garcés Sáez, a cumplir la pena de **TRES AÑOS Y UN DÍA** de presidio menor en su grado máximo, además de la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

II.- Que, no reuniendo los requisitos establecidos en la ley 18.216; la pena impuesta será cumplida de manera efectiva, computándose su cumplimiento desde el día 28 de octubre de 2020, fecha desde la que el sentenciado ha estado en prisión preventiva en la presente causa.

III.- Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 19.970 y su Reglamento, en la medida que no se haya efectuado con antelación, en los términos que indica el inciso segundo de la disposición legal antes citada.

IV.- Que, en razón de lo indicado en el considerando vigésimo noveno de la presente sentencia, se exime al sentenciado del pago de las costas de la causa.

En cuanto a la atenuante del artículo 11 n°1 en relación al artículo 10 n°1 del Código Penal, fue acordada con el voto en contra de la magistrado Mihovilovic, quien estima, que no concurre respecto del acusado Juan Antonio Fernández Ruyer, toda vez que los antecedentes probatorios aportados al efecto durante el juicio son insuficientes para dar cuenta que aquél padezca o presente algún trastorno mental, que al decir, de quienes admiten la eximente incompleta respecto de eximentes moralmente divisibles, es lo esencial o básico al invocarse las normas referidas; e incluso más, aun tratándose de algunos casos de personalidad "esquizoide" o de personas con "neurosis de angustia u obsesiva", en que la enfermedad mental no ha alterado los procesos cognoscitivos o volitivos al momento de cometer el crimen, la jurisprudencia no ha acogido la eximente incompleta alegada, como tampoco tratándose de "características de personalidad" derivadas de la "adicción al alcohol o a las drogas" (Sergio Politoff Lifschitz y Luis Ortiz Quiroga, "Texto y Comentario del Código Penal Chileno", Tomo I, páginas 170, 171 381 y 382); como tampoco se ha acreditado en el juicio que de

alguna manera se encontrare afectada o disminuida la razón del acusado por alguna causa independiente a su voluntad; por lo que no se puede sostener que existe alguna dificultad en el encartado que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión; y por lo mismo ha quedado establecido que al momento de la comisión del ilícito, el acusado no presentó ningún problema que afectara o dificultara su capacidad de conocer lo injusto de su actuar y de auto determinarse, ni que la voluntad se encontrare interferida de alguna manera, que hiciere que su voluntad no fuere libre.

Al contrario de lo alegado por la defensa, resulta que la conducta del acusado posterior a la comisión del ilícito que se le imputa, esto es, el permanecer en el lugar del delito y el reconocer al personal de Carabineros, el ser autor del mismo demuestran que entendía perfectamente que había matado al Sr. Garcés Sáez, tal como lo declaró el propio acusado en sede judicial, como se lo manifestó al funcionario aprehensor, versión ratificada por el Sargento Primero Nelson Salgado González en audiencia. El encartado, además, se mostró arrepentido según, declaró el funcionario. Por otro lado, al deponer en juicio, el Sr. Fernández Ruyer fue capaz de relatar el hecho, las circunstancias que lo impulsaron a agredir a la víctima y lo sucesos posteriores a ésta, reconoció el arma homicida y la fotografía que le fue exhibida, que corresponde a una imagen del mismo el día de la detención. También cooperó con la policía al permitir ser fotografiado y que se le tomaran muestras para examen. Asimismo, en audiencia reconoció el arma homicida. Que el que haya obrado bajo los efectos del alcohol no altera el hecho que tuvo perfecto conocimiento de la ilicitud de su obrar, sin perjuicio de reconocerse por este tribunal que permaneció en el sitio del suceso, y confesó el delito, así como también cooperó con la investigación de acuerdo a sus posibilidades. Circunstancias que configuran las atenuantes ya acogidas por todos los sentenciadores.

En suma, en concepto de esta juez, no concurre la imputabilidad disminuida alegada por la defensa, toda vez que si bien conforme a la prueba rendida quedó

establecido que el acusado presenta un retardo mental leve, ello no es suficiente para sustentar la eximente incompleta en cuestión, por cuanto no se ha establecido la existencia de ninguna enfermedad mental ni la existencia de alguna causal independiente de la voluntad del acusado que pudiese afectar o dificultar de alguna manera la capacidad de conocer o comprender el injusto y de determinar el actuar conforme a dicha comprensión.

Que consecuente con lo anterior, al concurrir solo dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante, esta juez estima que debe hacerse una rebaja de un grado, desde el mínimo de la pena asignada por ley al delito, y dentro de ese grado, esto es el presidio mayor en su grado mínimo, imponer la pena de menor entidad, ello conforme al artículo 67 del Código Penal.

Ejecutoriada que sea esta sentencia, comuníquese al Juzgado de Garantía respectivo.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Sentencia redactada por el juez suplente Rogelio Patricio Inostroza Rivera.

RUC N° 2010057328-9

RIT N° 176-2021

Pronunciada por los jueces titulares del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, Karina Gema Mihovilovic Gutiérrez y Jaime Rodrigo Véjar Carvajal; y por el juez suplente de este mismo tribunal, Rogelio Patricio Inostroza Rivera.